

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA FRENTE A LA
CONTAMINACIÓN MINERA METÁLICA EN LA PROVINCIA DE
AYABACA”**

Presentada por:

Br. GRAMSCI DE JESÚS ZEGARRA FLORES

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Línea de Investigación Institucional:

Legislación y Ciencias Políticas

Sub línea de Investigación:

Constitucional

**PIURA - PERÚ
2019**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA FRENTE A LA
CONTAMINACIÓN MINERA METÁLICA EN LA PROVINCIA DE
AYABACA”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Bach. GRAMSCI DE JESÚS ZEGARRA FLORES
Ejecutor

Mg. ESTHEL Y ROSA BAYONA CASTRO
Asesora

Línea de Investigación Institucional

Legislación y Ciencias Políticas

Sub línea de Investigación

Constitucional

PIURA - PERÚ
2019

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **GRAMSCI DE JESÚS ZEGARRA FLORES** identificada con DNI N° **46994208**, en la condición de Estudiante () Egresante () Egresado (**x**), de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliado en **A.H. PUEBLO LIBRE Mz. A. Lote 1** Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, Celular: **969578925**, Email: **gramscidejesus@gmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura, 29 de mayo del 2019

DNI N° 46994208

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



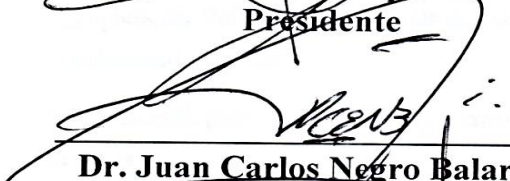
TESIS

**“EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA FRENTE A LA
CONTAMINACIÓN MINERA METÁLICA EN LA PROVINCIA DE
AYABACA”**

TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO



Dr. Luis Alberto Yaipén Hidalgo
Presidente



Dr. Juan Carlos Negro Balarezo
Miembro Vocal



Abg. Oscar Enrique Vilela Vargas
Miembro Secretario

PIURA – PERÚ
2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
0117-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: **"EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA FRENTE A LA CONTAMINACION MINERA METALICA EN LA PROVINCIA DE AYABACA"**, presentada por el **Bachiller; ZEGARRA FLORES GRAMSCI DE JESUS**, para optar el Título Profesional de Abogado, con el **asesoramiento** de la **MAGISTER; ESTHELY ROSA BAYONA CASTRO**; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADO (X)

DESAPROBADO ()

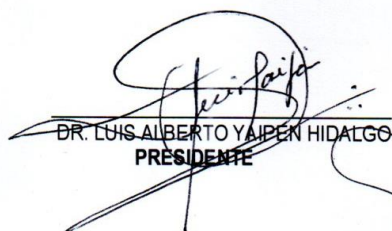
Con la mención de:

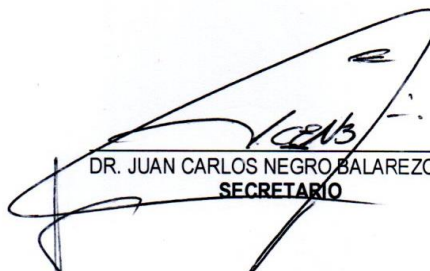
SOBRESALIENTE

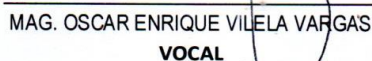
(X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.

(X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 30 de diciembre de 2019


DR. LUIS ALBERTO YÁÑEZ HIDALGO
PRESIDENTE


DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO
SECRETARIO


MAG. OSCAR ENRIQUE VILELA VARGAS
VOCAL

DEDICATORIA

A MI FAMILIA

A mi padre Manuel de Jesús Zegarra Betancourt, a mi madre Yeni Flores Merino, a mi hermano Bretch de Jesús Zegarra Flores y Frederick Engels Zegarra Flores, por su apoyo constante.

AL MAESTRO ENRIQUE DUSSEL

Por habernos mostrado la Filosofía de la liberación que ayuda a gestar un derecho para la vida en la sociedad.

A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y POLÍTICA

A la Universidad Nacional de Piura, por ser mi alma mater y centro de estudios importante de la región y el país.

A la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sus docentes, trabajadores y compañeros, que han contribuido a la formación profesional de manera conjunta.

Al Partido Socialista que es una escuela permanente de ética, historia y filosofía de la vida, en especial al compañero Jaime Gonza Rivera y Olivarez Gonza Rivera.

A LA PROVINCIA DE AYABACA

A ese pequeño territorio que alberga las fuentes de agua para la región.

AGRADECIMIENTO

A mi asesora Esthely Rosa Bayona Castro, por su apoyo incondicional, por su paciencia y rol pedagógico permanente en esta investigación.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	vi
AGRADECIMIENTO.....	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	xi
INDICE DE ANEXOS	xii
ÍNDICE DE APÉNDICES	xiii
LISTA DE ABREVIATURAS	xiv
RESUMEN.....	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	18
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	18
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	19
1.2.1. Problema General:	19
1.2.2. Problema Específico:.....	19
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.4. OBJETIVOS:.....	19
1.4.1. General:	19
1.4.2. Específico:	19
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	20
1.5.1. Delimitación Espacial:.....	20
1.5.2. Delimitación temporal:	20
1.5.3. Delimitación económica:	20
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	21
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	21
2.2. BASES TEÓRICAS	22
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS	28
2.4. MARCO REFERENCIAL	30
2.4.1. Cambio climático.....	30
2.4.1.1. Definición.....	30
2.4.1.2. Situación actual del cambio climático a nivel mundial	30
2.4.1.3. Efectos del cambio climático en el Perú.....	31
2.4.1.4. Cambio climático en la región Piura	31

2.4.1.5.	Normatividad sobre el Cambio climático	32
2.4.2.	Derecho Fundamental al agua	33
2.4.2.1.	Definición.....	33
2.4.2.2.	El Derecho Fundamental al agua en el Derecho Internacional.....	34
2.4.2.3.	El Derecho Fundamental al agua en el ordenamiento jurídico nacional	35
2.4.2.4.	Análisis sobre la normatividad del agua en el Perú.....	35
2.4.3.	Estado Constitucional de Derecho:.....	36
2.4.3.1.	Definición:.....	36
2.4.3.2.	Elementos del Estado Constitucional de Derecho:.....	37
2.4.3.3.	Obligaciones del Estado Constitucional de Derecho:.....	39
2.4.4.	La minería en el Perú:.....	40
2.4.4.1.	Definición:.....	40
2.4.4.2.	Contexto de la minería en el Perú:	40
2.4.4.3.	Las Concesiones mineras:	41
2.4.4.4.	El Estudio de impacto ambiental:	41
2.5.	HIPÓTESIS	42
2.5.1.	Hipótesis General	42
2.5.2.	Hipótesis Específica	42
2.6.	DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	42
2.6.1.	Definición Conceptual.....	42
2.6.2.	Operacionalización.....	43
	CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	46
3.1.	ENFOQUE	46
3.2.	DISEÑO	46
3.3.	NIVEL.....	46
3.4.	TIPO	46
3.5.	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	46
3.6.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	47
3.7.	ASPECTOS ÉTICOS	48
	CAPÍTULO IV: PROBANZA DE HIPÓTESIS	49
4.1.	PROBANZA JURÍDICO SOCIAL-DOCTRINAL	49
4.1.1.	PROBANZA HIPÓTESIS GENERAL	50
4.1.2.	PROBANZA HIPÓTESIS ESPECÍFICA	53
4.1.3.	PROPUESTA	56
	CONCLUSIONES	57
	RECOMENDACIONES	58

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59
ANEXOS.....	62
APÉNDICES	69

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: CONCESIONES MINERAS EN LA PROVINCIA DE AYABACA	51
---	----

INDICE DE ANEXOS

ANEXOS 1: MATRIZ BÁSICA	62
ANEXOS 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHAJE.....	63
ANEXOS 3: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	66
ANEXOS 4: PRESUPUESTO	68

ÍNDICE DE APÉNDICES

APÉNDICE 1: LEY N° 30588: LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL.....	69
APÉNDICE 2: DECRETO SUPREMO N° 024-2008-DE	70
APÉNDICE 3: LEY QUE MODIFICA LA LEY 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA	70

LISTA DE ABREVIATURAS

- **MINAM:** Ministerio del Ambiente
- **OIT:** Organización Internacional del Trabajo
- **TC:** Tribunal Constitucional
- **ZEE:** Zonificación Económica Ecológica
- **OT:** Ordenamiento territorial
- **SEIA:** Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
- **EIA:** Estudio de Impacto Ambiental
- **UNESCO:** Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura
- **WWE:** World Wildlife Fund (Foro Mundial para la Naturaleza)
- **ANA:** Autoridad Nacional del Agua
- **STC:** Sentencia del Tribunal Constitucional
- **DE:** Ministerio de Defensa
- **INGEMMET:** Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
- **COP:** Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
- **PA:** Proceso de Amparo
- **CONACAMI:** Confederación nacional de comunidades afectadas por la minería

RESUMEN

La presente investigación titulada “**EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN MINERA METÁLICA EN LA PROVINCIA DE AYABACA**”, hace un análisis del derecho fundamental al agua a propósito de haber sido consagrado en la Constitución Política del Perú en el contexto del cambio climático a nivel mundial y el estrés hídrico que enfrenta nuestro país, lo cual hace necesaria su garantía y protección, puesto que la vulneración de este derecho en la provincia de Ayabaca corre un grave riesgo ante actividades extractivas como la minería metálica.

Por ello, el objetivo de la investigación fue analizar y demostrar la manera en que la actividad minera metálica afecta el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca en el contexto que de manera desmedida el Estado otorga derechos mineros en ecosistemas frágiles como los páramos andinos y bosques de neblina. Los estudios revelan que los ecosistemas existentes en la provincia de Ayabaca son nacientes de agua para extensos territorios y por tanto su necesaria preservación.

La presente investigación buscó analizar asimismo, de un modo crítico, que el Estado Constitucional de Derecho presenta debilidades en el cuidado de los recursos hídricos frente al exceso de actividades extractivas a partir de las normas legales expedidas.

La principal razón en la que se basó esta investigación; es sustentar que las normas mineras relativas a las concesiones mineras, y el estudio de impacto ambiental, que afectan la disponibilidad de agua.

Se demostró que el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca, como un derecho fundamental difuso importante, corre riesgos inminentes ante las concesiones y entrega de derechos mineros a empresas extractivas con proyectos a tajo abierto en zonas de nacientes de agua.

Palabras claves: Derecho fundamental al agua, minería, nacientes de agua, páramos, Estado Constitucional de Derecho.

ABSTRACT

This research entitled "**THE FUNDAMENTAL RIGHT TO WATER AGAINST METALLIC MINING POLLUTION IN THE PROVINCE OF AYABACA**", makes an analysis of the fundamental right to water in order to have been enshrined in the Political Constitution of Peru in the context of climate change a global level and the water stress facing our country, which makes its guarantee and protection necessary, since the violation of this right in the province of Ayabaca runs a serious risk against extractive activities such as metal mining.

For this reason, the objective of the investigation was to analyze and demonstrate the way in which metallic mining activity affects the fundamental right to water in the province of Ayabaca in the context that the State grants in an excessive way mining rights in fragile ecosystems such as the Andean moors and mist forests. Studies reveal that the existing ecosystems in the province of Ayabaca are water sources for large territories and therefore their necessary preservation.

The present investigation also sought to analyze, in a critical way, that the Constitutional State of Law presents weaknesses in the care of water resources against the excess of extractive activities based on the legal regulations issued.

The main reason on which this investigation was based; It is to support that the mining norms related to mining concessions, and the study of environmental impact, which affect the availability of water.

It was shown that the fundamental right to water in the province of Ayabaca, as an important diffuse fundamental right, runs imminent risks in the face of concessions and delivery of mining rights to extractive companies with open pit projects in areas of water sources. Keywords:

Fundamental words: to water, mining, water springs, badlands, Constitutional State of Law.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis denominada “El Derecho Fundamental al agua frente a la contaminación minera metálica en la Provincia de Ayabaca”, se aborda a partir del contexto en el que el Estado propugna la minería como forma de crecimiento económico y por otro lado, está la conservación y el abastecimiento del agua a la población en el plano doméstico, agrario, industrial, etc. Por lo que nos enfrentamos a este dilema y el ordenamiento jurídico, es un instrumento importante que contribuye a regir y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos fundamentales.

La provincia de Ayabaca tiene ecosistemas especiales como los páramos y bosques de neblina, que son las nacientes de las aguas o cabeceras de cuenca, alimentando ríos importantes de la región Piura. El Estado, a su vez contempla un conjunto de normas importantes referidas al ambiente y a lo social, a la lucha contra el calentamiento global, al cuidado de las cuencas y los recursos hídricos, áreas protegidas así como el desarrollo sostenible.

Sin embargo, promulga también normas jurídicas en minería metálica, que sin una evaluación real de las consecuencias que genera, ponen en riesgo derechos tan importantes como la vida, la salud, la integridad física, etc., en ese sentido se presenta una contradicción de normas jurídicas.

Sobre la base de ello la formulación del problema general de investigación es entonces ¿Cómo proteger el agua como un derecho humano fundamental para la vida de la provincia de Ayabaca? Como una preocupación práctica colectiva. Así como el problema específico ¿Qué debilidad presenta el Estado Constitucional de Derecho peruano respecto de la protección del agua en la provincia de Ayabaca?

A partir de allí surge la hipótesis general de la investigación, las normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera metálica relativas a las concesiones mineras y el estudio de impacto ambiental vulneran el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca.

Durante los últimos años el Estado ha venido implementando y aumentando las concesiones mineras, que de manera desordenada, ha entregado derechos a empresas extractivas para que operen en distintos territorios. Por ello que la población y comunidad en general se encuentra en la problemática para cuidar las lagunas, el sistema hídrico y el conjunto de ecosistemas frágiles. Ante ello que el objetivo general de esta investigación ha sido determinar de qué manera la actividad minera metálica vulnera el derecho fundamental al agua.

La metodología que se ha utilizado en este trabajo de investigación es cualitativa en su enfoque, puesto que su finalidad ha sido comprender el fenómeno de estudio en su contexto e identificado asimismo la naturaleza profunda de la realidad, su estructura y relaciones para cumplir tareas fundamentales de toda investigación: recoger datos e interpretarlos.

El derecho fundamental al agua es reciente en nuestro Estado Constitucional de Derecho, de ese modo se vienen desarrollando estudios e investigaciones para el cuidado de este recurso fundamental para la vida en la provincia de Ayabaca.

Con respecto al contenido de la presente tesis, esta se desarrolla en cuatro capítulos importantes. En la primer capítulo señala la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, la justificación, los objetivos y la delimitación de la investigación.

En el segundo capítulo se refiere a los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el glosario de términos básicos de la investigación, el marco referencial en el que se exponen los puntos principales y la hipótesis tanto general como específica.

Posteriormente en el tercer capítulo se establece el marco metodológico exponiendo el enfoque seguido, diseño, nivel, tipo de investigación, métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos. En el cuarto capítulo se realiza la probanza de la hipótesis principal y específica; y finalmente la propuesta de la tesis planteada.

CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

Actualmente la realidad mundial pasa uno de los momentos más críticos de problemas ambientales, los mismos que se manifiestan en el calentamiento global, contaminación del agua, basura de mar, derrames de petróleo, pesticidas, relaves mineros, contaminación de suelos por sustancias tóxicas, lluvias ácidas, contaminación acústica, aire contaminado, entre otros; y esto es producto de un irracional manejo de los sistemas productivos, industriales, tecnológicos y consumismo desmesurado, hechos que afectan dramáticamente la supervivencia humana.

Las emisiones de dióxido de carbono durante los últimos años se han incrementado generando fenómenos complejos como el efecto invernadero, que ponen en riesgo la salud de las personas, así como el aumento de la temperatura y con ello el cambio climático, la desaparición de ecosistemas fundamentales, el derretimiento de los polos, etc.

El Perú, es uno de los países con mayor diversidad biológica y enormes recursos naturales sin embargo también es uno de los más susceptibles al cambio climático. Los glaciares han venido disminuyendo y se encuentran en peligro que en periodos cortos desaparezcan así como también ecosistemas acuíferos importantes.

“Este hecho tendría consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua considerando que la mayor parte de los ríos de la vertiente occidental de nuestros andes presentan un considerable caudal solo durante el período de lluvias (diciembre- abril) mientras que para el período de estiaje (mayo-diciembre) se abastecen, ya sea por el escurrimiento, por filtración de las zonas altas o por fusión de los glaciares” (VARGAS, 2009).

En vista de ello, estamos ante una realidad en la que se van deteriorando las condiciones de vida de la población peruana, por lo que el cuidado del agua es una de las preocupaciones fundamentales para las instituciones y la población en general.

El Estado contiene un conjunto de normas ambientales para el cuidado de los recursos hídricos, incluso el año 2017 se ha incorporado el Derecho Humano Fundamental al agua a la Constitución Política del Estado peruano.

Sin embargo, “[...] el Perú es uno de los centros mundiales de reciente expansión minera, pone de manifiesto la presión que este crecimiento impone sobre el recurso hídrico, los medios de vida y las relaciones sociales” (BEBBINGTON & BURY, 2010).

Ayabaca, provincia andina de la región Piura, tiene ecosistemas especiales como son los páramos y bosques de neblina, que son generadores de agua para la región en grandes cantidades, sin embargo, este recurso hídrico se ha visto amenazado por normas legales que concesionan estos ecosistemas a actividades no sostenibles como la minería a tajo abierto en las nacientes de agua de Ayabaca.

Contaminando el agua de esta zona, en su origen, se pone en riesgo el abastecimiento a una amplia zona de la población y por tanto el derecho fundamental al agua y otros como la vida, la salud, etc. El Estatus Jurídico del Derecho fundamental al agua no puede ser solo nominativo, sino que, atendiendo la problemática mundial, nacional y local, debe consagrarse a partir de considerarlo determinante para la vida humana.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General:

¿De qué manera la actividad minera metálica afecta el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca?

1.2.2. Problema Específico:

¿Qué debilidad presenta el Estado Constitucional de Derecho respecto de la protección del agua en la provincia de Ayabaca?

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La intención de esta investigación es contribuir al conocimiento y desarrollo del Derecho Fundamental al agua que se viene implementado en el Perú en el contexto de la realidad destructiva de la minería metálica a través de continuas concesiones en territorios de ecosistemas que producen agua, constituyendo el elemento esencial de la población ayabaquina en distintas actividades económicas. Por miles de años este líquido elemental ha sido el sustento de la población de la provincia de Ayabaca por lo que es primordial preservar. El impacto destructivo en la minería afectaría seriamente los ecosistemas que posee fuentes de agua (páramos, bosques de neblina y ciclo hidrológico) por lo que el presente estudio pretende ayudar en comprender que los ecosistemas acuíferos en la provincia de Ayabaca tienen gran importancia puesto que abastecen las principales cuencas hídricas de la Región Piura.

1.4. OBJETIVOS:

1.4.1. General:

- Determinar de qué manera la actividad minera metálica vulnera el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca.

1.4.2. Específico:

- Analizar el accionar del Estado Constitucional de Derecho respecto de la protección del agua en la provincia de Ayabaca.

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. Delimitación Espacial:

La delimitación espacial de esta investigación es la provincia de Ayabaca, ubicada en la región Piura, Perú.

1.5.2. Delimitación temporal:

Temporalmente se ubica a partir del año 2017, fecha en que se incluye el Derecho Fundamental al agua en la Constitución Política del Perú.

1.5.3. Delimitación económica:

La investigación corre por cuenta propia del investigador.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

- En el trabajo de investigación *El Derecho Colectivo Al Agua*, sostiene que existe una visión privatizadora sobre el agua y eso genera enfrentamiento con sectores sociales en los andes. El agua tiene mucho más sentido que el económico, el derecho al agua desde la perspectiva de las poblaciones andinas no es solamente un derecho colectivo con dimensiones económicas sino también sociales y culturales. Plantea generar una estrategia por niveles para el reconocimiento de los derechos colectivos al agua de grupos campesinos, indígenas y otros más vulnerables. (URTEAGA , 2006).
- Según la investigación *El Derecho Humano al Agua y los aportes del Sistema Interamericano De DD.HH.* trata la importancia del agua como recurso esencial, el derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno sobre el abastecimiento del agua así como garantizar su justicia, calidad y la universalidad del agua como recurso natural y como servicio público. (SALMÓN, 2012).
- Asimismo en la tesis *Derecho a la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los páramos de Pacaipampa-Ayabaca, frente a la minería* destaca que desarrollar proyectos mineros por parte de empresas extractivas en zonas de ecosistemas frágiles como los páramos, es inviable e imposible, porque afectará la regulación hídrica y más aún cuando se trata de minería a tajo abierto. (GARAY, S.F.).
- De otro lado en la investigación *Desertificación por minería metálica en páramos y bosques de neblina de nacientes de cuenca en el norte del Perú* describe desde un punto de vista biológico la importancia de los bosques de neblina y los páramos andinos en la sierra de Piura y a partir de allí nacen ríos importantes para la provincia y la región como río Blanco, Quiroz y Chinchipe. Como conclusión establece: “Las grandes superficies de concesiones minero-metálicas afectarían a cuatro tipos de bosques secos: Bosque Seco Semi-denso de montaña como los de Montero; Bosque Seco Denso de Colinas como el de suyo; Bosque Seco Semi-denso de llanura, como las de San Lorenzo”. Asimismo establece que otro escenario amenazado es el de las partes bajas de las cuencas de los ríos Chira y Piura, donde se encuentran las formaciones vegetales de bosques secos, cuya cobertura vegetal expresa la capacidad de almacenamiento de sus acuíferos subterráneos constituyendo a su vez la protección natural que los sostiene. (TORRES, 2005).
- Cabe resaltar que en la investigación “*El Reconocimiento Constitucional del agua como derecho fundamental*” explica los problemas que está enfrentando este recurso natural como consecuencia de la contaminación ambiental y otros factores pero también considera la importancia de tipificar positivamente el agua como derecho fundamental en la Constitución Política del Perú de 1993. Por la importancia del agua estar ligado al derecho a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud y otros, busca el reconocimiento de un recurso natural esencial y necesario en la vida y desarrollo de la humanidad. (RAFAEL, 2018).

2.2. BASES TEÓRICAS

• DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico [...]. La disponibilidad del agua supone el abastecimiento continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Entre ellos, quedan comprendidos el consumo por boca, lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y del hogar (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

El fundamento jurídico del derecho al agua recae en varios tratados de Derechos Humanos que realizan tanto un reconocimiento implícito como explícito de aquel (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

Entre los primeros podemos mencionar la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, los pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. También, incluyen un reconocimiento expreso del derecho al agua la *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*, la *Convención sobre los Derechos del Niño* y la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

Este derecho también se reconoce en otros instrumentos internacionales de carácter ambiental (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

La tendencia a propiciar el reconocimiento del derecho al agua en las cartas de derechos fundamentales se vio plasmada en el año 2002 cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó la Observación General 15. Ese Comité interpretó que el derecho al agua deriva de otros derechos contenidos en el Pacto, estableciendo que el uso de la palabra “incluso” del artículo 11 significa que la enumeración no pretendió ser exhaustiva. De modo que, el derecho al agua se encuadra en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, puesto que es una de las condiciones imprescindibles, como anticipamos, para asegurar la calidad de vida. Asimismo, el Comité entiende que el derecho al agua se halla implícitamente reconocido en el artículo 12, es decir, entiende que se encuentra indisolublemente asociado a más alto nivel posible de salud (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

En suma, si bien ya existían diversos instrumentos internacionales que habían reconocido el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dio un paso decisivo al interpretar que implícitamente se hallaba reconocido en los artículos 11 y 12 del Pacto y al configurarlo como un derecho humano (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

• EL AGUA:

El agua es un recurso natural, transcendental y esencial para la existencia en el planeta. El uso y acceso constituye un derecho para garantizar otros importantes derechos como la alimentación y salud. Es por tanto fundamento de otros derechos. Si bien el agua es uno de los recursos más abundantes en el mundo, solo el 2,53% puede ser utilizado para las actividades productivas del ser humano. (SALMÓN, 2012).

Los factores como el calentamiento global, la mala distribución del recurso, entre otros, han desencadenado una creciente escasez que ha impactado decididamente en el Derecho y la forma en que este regula el agua. (SALMÓN, 2012).

La cantidad de agua que hay en nuestro planeta es de 1 386 millones de km³ de la cual sólo el 2.5% es dulce y de éste, únicamente el 30.5% puede ser utilizada por el hombre, ya que el otro 69.5% se encuentra en los glaciares, en forma de hielo y en el permafrost, por tanto, únicamente hay 10.53 millones de km³ disponibles para su aprovechamiento ((seudónimo), s.f.).

El World Water Development Report (Reporte mundial del desarrollo del agua) de la UNESCO (2003) de su World Water Assessment Program (Programa mundial para el asesoramiento del agua)

indica que en los próximos 20 años, la porción de agua disponible para todos decrecerá en un 30% ((seudónimo), s.f.).

“[En América Latina] Para el horizonte 2020s, entre 7 y 77 millones sufrirán por stress hídrico debido al cambio climático [...] para mediados del siglo es probable que en el este de la Amazonía los bosques tropicales sean reemplazados por sábanas [...]” (CONDE & SALDAÑA, 2007).

El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años (un ritmo dos veces mayor que el crecimiento humano). (Ana, 2018). Así como otro de los aspectos a destacar es el uso que se le da, esto es, el 75% se destina para la agricultura y ganadería, el 15% para la industria y tan sólo el 10% para uso doméstico del cual el 1% es para consumo ((seudónimo), s.f.).

La cantidad de agua dulce en el planeta es constante, esto es, 10.53 millones de km³, el problema está en que parte de ella se contamina, y cada día hay más y más habitantes en el planeta, por tanto, se necesita más agua y esto reduce la ración disponible para cada persona. ((seudónimo), s.f.).

Según la (ANA, 2018), en la medida que se incrementa la población en el mundo será necesario el acceso a mayor cantidad de agua de calidad, sin embargo, la cantidad de agua que hay en el mundo no se incrementa.

• EL AGUA EN EL PERÚ

El Perú cuenta con tres vertientes en su territorio, con una disponibilidad de casi 2 billones de metros cúbicos de agua cada año, sin embargo, por nuestra geografía, la vertiente del Pacífico –donde reside el 66 % de la población- sólo cuenta con una disponibilidad de 2,2 % de acceso al agua. (ANA, 2018).

Nuestra geografía ha determinado la existencia de 159 cuencas hidrográficas en nuestro territorio, cada una de ellas tiene sus singularidades y necesidades de gestión de recursos hídricos adecuados, por ello, la Autoridad Nacional del Agua, a través del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos viene promoviendo la creación, instalación y gestión de los consejos de recursos hídricos por cuencas como uno de los modelos de gestión del agua más eficientes y adecuados para el país. (ANA, 2018).

La vertiente del Pacífico tiene una disponibilidad del 2,18% del agua total, con una población del 65,98%. La vertiente del Atlántico del 97,7% del agua para una población de 30% y la vertiente del Titicaca la disponibilidad del 0,56% para una población de 3,26% (ANA, 2018).

Es necesario mencionar que el Perú es un país privilegiado y cuenta con 1.89 % de la disponibilidad de agua dulce del mundo, siendo el país que ocupa el puesto ocho a nivel mundial y estando en América del Sur, que es la región del mundo donde se cuenta con la mayor cantidad de agua dulce en el mundo (ANA, 2018).

“El enfoque con respecto al agua ha evolucionado en las últimas décadas desde la concepción de ésta como un bien económico a la de un derecho humano. El cambio de paradigma se debió principalmente a la importancia que este recurso tiene para la supervivencia del ser humano lo cual no era cumplido cabalmente si se lo abordaba desde una perspectiva puramente económica” (SALMÓN, 2012).

Siendo la Constitución Política del Perú de 1993 la carta magna por la cual se rige todo el ordenamiento jurídico nacional, el Estado peruano en su Artículo 66° contempla que los “recursos naturales [...] son patrimonio de la nación”.

En ese marco se ha diseñado el conjunto de normas legales y administrativas que organizan y protegen el agua como recurso fundamental para las distintas actividades humanas. La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), aprobada en el año 2009 en el Artículo 99° establece los instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos a) La Política Nacional Ambiental; b) La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; c) El Plan Nacional de los Recursos Hídricos; y d) Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.

Estos instrumentos son esenciales en el cuidado de los recursos hídricos, así como la importancia que le proporciona el Estado a los recursos hídricos para el desarrollo del país y en una idea de sostenibilidad puesto que el agua constituye un derecho que determina a otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la integridad física, etc.

Y tiene como objetivo general “lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional que permita satisfacer las demandas presentes y futuras, así como garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico y su aprovechamiento eficiente y sostenible; con criterios de equidad social, económico ambiental” (ANA, 2018).

El texto de la Ley de Recursos Hídricos (2009) precisa en el Artículo 2° que el agua constituye el patrimonio de la nación. Además, crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo objetivo será articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación en los ámbitos de las cuencas, los ecosistemas y los bienes asociados.

Contar ahora con una adecuada gestión del agua es imperativo para que el país se adapte a los impactos del calentamiento global (CANNOCK, 2016). Como se ha mencionado, durante las últimas décadas, los efectos del calentamiento global arrojan al derecho, que forma parte del Estado retos en el cuidado de recursos fundamentales y esos están en relación con principios éticos materiales que todo ordenamiento jurídico debe acoger.

El Estado peruano mantiene un conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad la planificación y cuidado de los recursos hídricos, conscientes de ese potencial del país, las instituciones encargadas deben garantizar de manera sostenible el suministro de recursos hídricos en el sentido amplio de la realidad. Esto es, el cuidado de las fuentes de agua y de esa manera los sectores como la agricultura, la población, la agroindustria no se vean afectados. Hay instituciones que de manera constante deben garantizar el suministro de los recursos hídricos, pero a su vez el cuidado de esas fuentes puesto que hay una apuesta por el desarrollo sostenible de las distintas actividades como la agricultura, el abastecimiento a la población, a las necesidades de infraestructura y la industria, siempre de calidad.

• **ACTIVIDAD MINERA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL:**

En el Perú ha habido una evolución respecto al desarrollo de actividades extractivas a lo largo de su historia. En los últimos decenios estas actividades han aumentado. Según Baca, nos dice “Una de las principales apuestas de las políticas del Consenso de Washington implementadas con fuerza en el Perú, desde inicios de los años 90, fue promover las inversiones en el sector minero. Para ello, se diseñó un marco normativo muy atractivo para las inversiones, con facilidades y beneficios tributarios a los que se sumaban los contratos de estabilidad tributaria y administrativa”.

Estos años de crecimiento económico en el Perú vino acompañado con la apertura de concesiones. “La evolución de las concesiones mineras muestra que este sistema casi automático de entrega de concesiones mineras ha llevado a un crecimiento acelerado y desordenado de éstas en el territorio nacional” (BACA, 2013).

El Decreto Legislativo 708 Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero¹⁰ implicó un cambio fundamental en la política minera nacional, no sólo porque permitió liberar derechos mineros que concentraba el Estado e iniciar la modernización del régimen de concesiones, sino porque planteó una serie de criterios para que la política económica fuese funcional al desarrollo de la minería. (VINCES & MALCA, 2015).

Sin embargo, las concesiones han sido entregadas de manera que se puede calificar de manera arbitraria. Las normas mineras están enmarcadas desde la Carta Magna y a partir de esas potestades se desarrolla una política minera. El Artículo 66° de la Constitución Política del Perú de 1993, referente a esto, dice lo siguiente:

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su

otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

En base al texto constitucional, el Estado tiene la potestad de otorgar las concesiones para la explotación de los recursos naturales.

Como manifiesta Baca, según la Ley General de Minería, para el inicio de las actividades de un proyecto minero, además del Título de Concesión, se requiere contar con los Estudios Ambientales aprobados. Sin embargo, en base al siguiente artículo de la Constitución Política del Perú, Artículo 67° se hace mención respecto de la Política Ambiental: El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Y, por tanto, la entrega de concesiones no puede ser de forma deliberada o arbitraria, sino que debe estar integrada a un conjunto de parámetros y procedimientos. “Se debe precisar que el otorgamiento de la concesión minera solo da el derecho, y que para desarrollar la actividad minera de exploración y explotación se requiere contar con una certificación ambiental, permiso o licencia de agua [...]” (BACA, 2013).

El aumento de las concesiones mineras durante los últimos ha aumentado que incluso en lugares el porcentaje de territorio es altísimo. “Como consecuencia de este proceso, hay provincias cuyos territorios han sido concesionados hasta en un 70% a 80% (provincia de Chumbivilcas en 85 %, Grau en 62%, Antabamba en 60% y los distritos de Baños del Inca y La Encantada en 100%” (BACA, 2013). En Ayabaca se han hecho concesiones mineras en zonas de ecosistemas frágiles: páramos y bosques de neblina. Mediante Decreto Supremo N° 024-2008-DE, se declara de necesidad pública.

Esta norma legal fue otorgada por el Poder Ejecutivo, tras desconocer la Consulta Vecinal realizada el 16 de setiembre del 2007, queriendo imponer el proyecto Río Blanco a pesar de la decisión de la población que en 95% dijo no a la actividad minera y a favor del cuidado de los páramos y bosques de neblina, del agua, el desarrollo sostenible como la agricultura.

Tal y como lo muestran las estadísticas de los últimos años, en el Perú se han hecho concesiones mineras de manera exagerada sin tener en cuenta criterios fundamentales como la factibilidad. En el territorio de la provincia de Ayabaca, se han entregado más de 15 concesiones al proyecto Río Blanco para la explotación de molibdeno y cobre (principalmente) pero sin un estudio ambiental serio, pues dañaría de manera irremediable un amplio ecosistema frágil que abastece de agua a la provincia de Ayabaca y buena parte de la región Piura.

- **ECOSISTEMAS Y FUENTES ACUÍFEROS:**

En las nacientes de dos grandes cuencas de los Andes del norte peruano en el departamento de Piura donde se originan los ríos Quiroz (hacia el Pacífico) y Chinchipe (hacia el Atlántico) se ubica un ecosistema de páramos y bosques de neblina que además de constituir una zona de alta complejidad biológica y concentración de endemismos como consecuencia de un accidente geológico denominado Deflexión de Huancabamba (TORRES, 2005).

Existen proyectos extractivistas minero-metálicos que se pretenden llevar a cabo. El más relevante de estos proyectos es el de extracción de cobre mediante tecnología de tajos abiertos en las zonas de bosques de neblina y páramos de las nacientes de los ríos Quiroz y Chinchipe, lo que generaría un inevitable proceso de desertificación en una de las zonas de mayor actividad agraria y presencia de bosques naturales en el norte del Perú (TORRES, 2005).

- **PÁRAMOS**

Los páramos andinos llamados también Jalcas en el norte del Perú (3,000-3,200 hasta 4,500 msnm) conforman un corredor de vegetación que atraviesa Sudamérica desde Venezuela hasta el norte del Perú. El Foro Mundial para la Naturaleza (WWF), incluye a los bosques montanos de Venezuela, Colombia, Ecuador y el Norte del Perú dentro de las 200 ecorregiones más importantes del mundo por ser un centro de diversidad y endemismos (TORRES, 2005).

Los páramos son ecosistemas muy frágiles con capacidad de regular los flujos y formación de agua. Son como esponjas que capturan, filtran y distribuyen el agua a las zonas bajas. Se extienden

desde el sur de Venezuela hasta la sierra de Piura. Estas a la vez son responsables de las cuencas altas del Quiroz (Ayabaca) y Chinchipe (Huancabamba), que se encuentran por encima de la Cordillera Andina Huamaní, a unos 3,500 m.s.n.m. (CONACAMI, 2006).

- **BOSQUES DE NEBLINA**

Los bosques de neblina, también llamados bosques nubosos, son densas nubes que se encuentran cubriendo las montañas. Estos representan el 2,5% de la selva tropical del mundo y se caracterizan por la diversidad de flora y fauna en una zona con permanentes precipitaciones. En el Perú, este tipo de bosques predominan en las zonas bajas de la sierra norte, los encontramos ubicados en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, a unos 1,300 y 2,500 m.s.n.m. (CONACAMI, 2006).

La biodiversidad de los bosques de neblina es sorprendente. Comparados con los bosques de la selva baja, los bosques de la selva alta y especialmente los nublados, han sido escasamente estudiados, de tal modo que se sabe relativamente poco de ellos (TORRES, 2005).

- **BOSQUES SECOS Y VALLES AGRÍCOLAS DE LAS PARTES BAJAS DE LAS CUENCAS**

Las grandes superficies de concesiones minero-metálicas afectarían a cuatro tipos de bosque seco: Bosque Seco Semi denso de montaña como los de Montero, Bosque Seco Denso de Colinas como el de Suyo; Bosque Seco Semi denso de llanura, como los de San Lorenzo, Lancones y Tambogrande, y Bosque Seco Semi denso de colina, como los de Paimas; complejo recurso forestal en el que se ha realizado enormes inversiones privadas y estatales para su manejo y conservación como ecosistema emblemático de la región Piura y ambiente en el que viven más de 30,000 familias. (TORRES, 2005)

Los ecosistemas mencionados que tienen los territorios de la zona alta y baja de la provincia de Ayabaca se han visto amenazados ante la presencia de actividades metálicas extractivas a tajo abierto y que además podría ser el factor de una mayor desertificación a lo largo de todo ese ecosistema, tanto del ande como de los valles productivos.

- **CUENCAS:**

La cuenca es un espacio biofísico que capta el agua de lluvia y la deposita en un río o fuente principal (lago, laguna, incluso un océano) considerándolo desde su parte más alta de captación, hasta lo que se ha considerado como valle o parte plana o semiplana circundante a dicha fuente (ALFARO & CÁRDENAS, 1998).

La región Piura tiene tres cuencas muy marcadas y gracias a ella, tenemos aproximadamente 270 mil has. de cultivo. El río Chira, el río Piura y el río Huancabamba, en mayor o menor medida contribuyen a fortalecer la economía regional.

El río Chira tiene sus aguas reguladas, que permiten llevar este recurso a las provincias de Piura y Sechura, hacia el sur de Paita y Talara por el oeste. Las aguas del río Quiroz y Chipillico alimentan San Lorenzo que permiten ampliar la frontera agrícola en las tierras de Las Lomas y Tambogrande.

En la actualidad existe una planificación de grandes proporciones de explotación de minerales metálicas en el territorio de las cuatro cuencas que dinamizan el ciclo hidrológico de este departamento [Piura] (TORRES, 2005).

Considerando que el río Quiroz aporta agua a los reservorios de Poechos y San Lorenzo, la pretensión de explotar minerales en sus nacientes pone en serio riesgo de desertificación a esta cuenca de Piura y afectaría a las ventajas comparativas y posibilidades de competencia de su agricultura liderada por cultivos de exportación como el mango, banano, limón azúcar, café y otros cuyo futuro inmediato dependerá de la inocuidad y carácter ecológico de su producción (TORRES, 2005).

La vegetación altoandina denominada jalca o páramo [...] además de su especial biodiversidad, constituyen una zona de captura de abundante humedad y precipitaciones y control de calidad (limpieza) y el flujo de agua que drena hacia las zonas bajas de las cuencas que nacen de ellas, tanto hacia el río Blanco que forma parte de la naciente del río Chinchipe (Jaén y San Ignacio en

Cajamarca); como hacia los ríos Tomayacu y Aranza, nacientes del río Quiroz (Ayabaca en Piura) (TORRES, 2005).

El Consorcio formado por la Universidad Nacional de Piura/PDL, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Unidad de Gestión de Cuencas UNIGECC (2005) ha desarrollado un interesante Proyecto sobre la VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA BINACIONAL CATAMAYO-CHIRA del cual uno de sus componentes es la VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO; con el objetivo de contribuir al ordenamiento, manejo y desarrollo armónico y sostenible de la cuenca binacional a la que pertenece la del Quiroz, y su área de influencia (TORRES, 2005).

En la parte peruana, el área proveedora del servicio ambiental hídrico la constituye la cuenca alta del río Quiroz, Ayabaca, que corresponde a los bosques de neblina y jalcas (TORRES, 2005).

Las microcuencas hidrográficas, son unidades territoriales donde el agua cae por precipitación, se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda a un mismo río, lago o mar y donde viven seres humanos, animales, plantas y se producen e interactúan una serie de relaciones (SAGUMA, 2002).

Entonces, las microcuencas hidrográficas son unidades físicas donde tienen lugar todos los procesos naturales. Son así mismo la unidad local, natural y lógica para fomentar el desarrollo. La suma de microcuencas, conforma una sub cuenca y a la vez estas, una cuenca. Este es un enfoque recomendado para afrontar a nivel regional temas críticos como la deforestación y los problemas asociados a la pérdida de la biodiversidad, y a la ejecución de proyectos mineros bajo condiciones sociales y ambientales cuestionables.

Nuestro territorio contiene importantes recursos hídricos que es el fundamento de la economía provincial y regional. Es necesario destacar que esos recursos se generan a partir de los ecosistemas frágiles y especiales de captación de agua que son los páramos y bosques de neblina. Por ello, la trascendencia del cuidado de las cuencas de “arriba hacia abajo”, para preservar el desarrollo de la provincia.

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

- **Derecho humano fundamental** (CARPIZO, 2011)

El conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las Constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y, en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos, los que se imbrican, como el individual, el social, el político, el económico y el cultural.

- **Páramos** (CONACAMI, 2006)

Los páramos son ecosistemas muy frágiles con capacidad de regular los flujos y formación de agua. Son como esponjas que capturan, filtran y distribuyen el agua a las zonas bajas. Se extienden desde el sur de Venezuela hasta la sierra de Piura. Estas a la vez son responsables de las cuencas altas del Quiroz (Ayabaca) y Chinchipe (Huancabamba), que se encuentran por encima de la Cordillera Andina Huamaní, a unos 3,500 m.s.n.m.

- **Bosques de neblina** (CONACAMI, 2006)

Los bosques de neblina, también llamados bosques nubosos, son densas nubes que se encuentran cubriendo las montañas. Estos representan el 2,5% de la selva tropical del mundo y se caracterizan por la diversidad de flora y fauna en una zona con permanentes precipitaciones. En el Perú, este tipo de bosques predominan en las zonas bajas de la sierra norte, los encontramos ubicados en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, a unos 1,300 y 2,500 m.s.n.m.

- **Cuenca** (ALFARO & CÁRDENAS, 1998)

La cuenca es un espacio biofísico que capta el agua de lluvia y la deposita en un río o fuente principal (lago, laguna, incluso un océano) considerándolo desde su parte más alta de captación, hasta lo que se ha considerado como valle o parte plana o semiplana circundante a dicha fuente.

- **Microcuenca** (SAGUMA, 2002)

Las microcuencas hidrográficas, son unidades territoriales donde el agua cae por precipitación, se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda a un mismo río, lago o mar y donde viven seres humanos, animales, plantas y se producen e interactúan una serie de relaciones.

- **Calentamiento Global** (CLIMÁTICO, 1992)

Cambio del clima atribuido directa e indirectamente a la actividad humana que produce una variación en la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempos comparables.

- **Vulnerabilidad** (MINAM M. D., 2013)

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación.

- **Recursos hídricos** (Ley N° 29338, 2016)

Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados con esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.

- **Contaminación** (MINAM M. D., 2013)

Distribución de una sustancia química o una mezcla de sustancias en un lugar no deseable (aire, agua, suelo), donde puede ocasionar efectos adversos al ambiente o sobre la salud.

- **Ecosistema** (MINAM M. D., 2013)

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

- **Ecosistemas frágiles** (MINAM M. D., 2013)

Son ecosistemas importantes, con características y recursos singulares, incluyendo sus condiciones climáticas importantes y su relación con desastres naturales. Son ecosistemas en peligro de que sus poblaciones naturales, su diversidad o sus condiciones de estabilidad decrezcan peligrosamente o desaparezcan debido a factores exógenos. Comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos.

- **Riesgo** (MINAM M. D., 2013)

Probabilidad o posibilidad de que un contaminante pueda ocasionar efectos adversos a la salud humana, en los organismos que constituyen los ecosistemas o en la calidad de los suelos y del agua, en función de las características y de la cantidad que entra en contacto con los receptores potenciales, incluyendo la consideración de la magnitud o intensidad de los efectos asociados y el número de individuos, ecosistemas o bienes que, como consecuencia de la presencia del contaminante, podrían ser afectados tanto en el presente como en escenarios futuros dentro del uso actual o previsto del sitio.

- **Área Natural Protegida** (MINAM M. D., 2013)

Espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.

- **Agua** (ANA, 2018)

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos rurales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

- **Convenio 169 de la OIT** (OIT O. I., 2014)

Hace referencia al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este Convenio forma parte del ordenamiento jurídico nacional y ostenta rango constitucional. Se encuentra vigente en nuestro país desde el año 1995.

- **Concesión minera** (VINCES & MALCA, 2015)

Acto jurídico administrativo de Derecho Público, en la que la Administración Pública, aplicando el principio de legalidad, cede de manera temporal y de manera unilateral a terceros, la explotación de los recursos minerales no renovables.

- **Consulta Previa (HUMANOS., 2012)**

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto de planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

2.4. MARCO REFERENCIAL

2.4.1. Cambio climático

2.4.1.1. Definición

Cambio del clima atribuido directa e indirectamente a la actividad humana que produce una variación en la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempos comparables (CLIMÁTICO, 1992).

2.4.1.2. Situación actual del cambio climático a nivel mundial

Durante las últimas tres décadas se viene refiriendo al fenómeno conocido como cambio climático en el mundo entero. En setiembre del año 2019 se hizo un llamado incluso a una huelga general por el cambio climático para concientizar a la comunidad en general de lo que significa este fenómeno que tiene causas eminentemente humanas.

Es pues un tema central que se debe abordar con la preocupación suficiente.

El cambio climático que viene experimentando el planeta, caracterizado por los efectos del calentamiento global (alteración de ciclos de lluvias, mayor erosión de suelos, mayor incidencia de desastres naturales, mayor escasez de agua, menor productividad agrícola, inseguridad alimentaria, cambio en los ecosistemas que sustentan la diversidad biológica), es conservadora del denominado “efecto invernadero” causado por el considerable incremento de las emisiones de diversos gases, principalmente el dióxido de carbono (CO₂) proveniente sobre todo de la quema de combustibles fósiles. Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y ocasionan la elevación de la temperatura media del planeta, la pérdida de glaciares en los polos y en las altas cumbres montañosas, así como la modificación del régimen de lluvias.

Es necesario considerar que el término cambio climático está íntimamente relacionado con “calentamiento global” que lleva implícito la influencia de las actividades humanas. La opinión científica mayoritaria sobre el cambio del clima habla que, la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a la actividad humana (BARBOZA, 2013)

Por lo que la actividad humana con sus medios de producción, la proliferación de un mercado basado en políticas arbitrarias de producción, el consumo excesivo, el modelo de extracción irracional de recursos naturales y la indiferencia sobre la protección del ambiente, las causas principales del calentamiento global (BARBOZA, 2013). Esto es sumamente importante toda vez que los recursos del planeta son limitado al no entra en un ciclo biológico equilibrado y empiezan a varias condiciones de vida básicos.

El calentamiento desproporcionado del clima se convierte en un gran problema del actual mundo globalizado, que requiere de más y mejores acciones de la comunidad internacional como de la latinoamericana, independientemente que las emisiones per cápita de estas sean escasas, comparándolas con la de los países del hemisferio norte (BARBOZA, 2013). Esas acciones deben girar de manera permanente en una visión ecológica y no meramente económica, ya que el primer principio y de toda disciplina es la vida, en una compleja expresión.

“El calentamiento durante el último siglo está ocurriendo, a juzgar por las medidas de temperatura del aire y de los océanos y los incrementos del nivel del mar, y de que, con una probabilidad de 9 sobre 10 [...] la actividad humana ha tenido un papel causal dominante” (GARCÍA

M. T., 2007). Ejemplo de ello tenemos la desaparición de lagunas que hace pocos años existían, especies de animales, ecosistemas importantes, etc. Al ya no desarrollarse las condiciones químicas y biológicas tiende a alterarse la vida.

Como los distintos estudios científicos han informado a lo largo del mundo, atravesamos la peor crisis de la humanidad sobre la destrucción de las condiciones de vida.

2.4.1.3. Efectos del cambio climático en el Perú

Las consecuencias del cambio climático que en el mundo se dan afectan a nuestro país en diverso grado, producto de gases de efecto invernadero. Tal como lo establece el Ministerio del Ambiente, “el Perú es responsable de apenas el 0.4% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos. En los últimos 30 años, hemos perdido el 22% de la superficie de nuestros glaciares, que son el 71% de los glaciares tropicales del mundo”. (MINAM M. D., 2009).

Ejemplo de algunos fenómenos en nuestro país del cambio climático es que en las últimas dos décadas el Perú se ha visto seriamente afectado por el Fenómeno El Niño (FEN), en Piura sus impactos han sido devastadores. A ello se suma el retroceso de nuestros glaciares tropicales con terribles consecuencias en el régimen hídrico” (MINAM M. D., 2009).

Y otro factos respecto de la cantidad de agua disponible para la persona dado que el cambio climático disminuye la cantidad de agua disponible (por afectar los regímenes de precipitación y derretimiento de los glaciares), esta asimetría, a su vez, se acentúa al estimar el uso de los recursos naturales y, sobre todo del abastecimiento y disponibilidad del agua. Se calcula que cerca del 90% de la población se ubica en el 38% del territorio nacional, el cual dispone de menos del 2% del agua aprovechable en el país” (PAZ & GARCÍA, 2006). Sobre esta realidad demográfica se considera al Perú como un país que presenta estrés hídrico.

Es importante agregar que los diversos estudios que se han realizado en el Perú “[...] se proyecta que para el 2025 los glaciares del Perú, por debajo de los 5500 metros sobre el nivel del mar habrán desaparecido.” (VARGAS, 2009), complicando de esa manera a poblaciones importantes en la disponibilidad de recursos hídricos.

A medida que transcurren los años y se produce el cambio climático, las fuentes de agua, provenientes en buena medida de la Cordillera de los Andes, se ve alterada, por lo que Vargas menciona que “Este hecho tendría consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua considerando que la mayor parte de los ríos de la vertiente occidental de nuestros andes presentan un considerable caudal solo durante el período de lluvias (diciembre- abril) mientras que para el período de estiaje (mayo-diciembre) se abastecen ya sea por el escurrimiento por filtración de las zonas altas o por fusión de los glaciares (VARGAS, 2009).

Por otro lado en cuanto a la gran diversidad territorial y geomorfológica del país trae consigo una gran biodiversidad (somos 1 de los 16 países mega diversos a nivel mundial), poseemos múltiples pisos ecológicos (alrededor del 84% de las zonas de vida del mundo), y variados climas (28 de 35 climas mundiales). Sin embargo, esta diversidad también se traduce en variedad de peligros naturales en nuestro territorio: heladas, aluviones, aludes y avalanchas, inundaciones, sequías, vientos huracanados, deslizamientos; entre otros peligros meteorológicos, y al estar situados dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, tenemos una alta sismicidad y vulcanismo (VARGAS, 2009).

2.4.1.4. Cambio climático en la región Piura

Es importante situar la región Piura como un territorio muy importante para el Perú en cuanto a lo valioso de sus ecosistemas que se encuentran profundamente relacionados y los efectos del cambio climático.

Por un lado se tiene la costa, ubicada en la zona donde se producen fenómenos naturales como El Niño, que si bien es un evento cíclico, como consecuencia del cambio climático se produce de manera inusual al calentarse las aguas marinas, lo que genera pérdidas cuantiosas.

Por otro lado, Piura tiene en su territorio la Cordillera de los Andes presentando diversidad ecosistémica. A diferencia de otras zonas de los andes, carece de glaciares ya que en el norte no son tan elevados, en cambio tiene unos ecosistemas especiales llamados páramos andinos y bosques de neblina que tienen como función la generación de agua alimentando microcuencas y cuencas importantes que ayudan en la agricultura de valles como Tambogrande y Bajo Piura.

Finamente la región Piura presenta como actividad económica importante la agricultura, tanto en la zona de la costa como de la sierra, por lo que los efectos del cambio climático tienen una relación directa con el abastecimiento del agua a la población y la producción de alimentos.

Es por ello que Angulo menciona “La alta variabilidad climática de la región [Piura] y en particular, los eventos extremos a que dan lugar, tienen influencia en el deterioro brusco de los indicadores sociales básicos de condiciones de vida de la población y de los indicadores económicos, que se producen en ese contexto. Asimismo, muchos de estos indicadores sociales revelan una precariedad estructural en las condiciones de vida de la población, lo que las predispone a una mayor vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Estos aspectos contribuyen a la hipótesis que en zonas de gran variabilidad climática, el deterioro de los indicadores de desarrollo puede estar revelando también situaciones de desajuste o desadaptación de las sociedades locales y regionales a dichas condiciones climáticas” (ANGULO, 2006).

2.4.1.5. Normatividad sobre el Cambio climático

El Estado peruano está implementando un conjunto de normas legales que ayuden a detener los fenómenos y efectos del cambio climático adversos.

En primer lugar tenemos la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, publicada el 15 de octubre del 2005, establece en su Art. I del Título Preliminar, en el que menciona “toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber a una plena gestión ambiental y de proteger el ambiente así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible”. (Ley N° 28611, 2005). La connotación de derecho irrenunciable es importante puesto que la gestión debe ser de parte de las autoridades así como de la sociedad civil, de la comunidad en general en mantener un ambiente sano.

Asimismo en la Ley General del Ambiente se establecen un conjunto de derechos y principios como son: Derecho a la participación en la gestión ambiental, derecho de acceso a la justicia ambiental, principio de sostenibilidad, de prevención, etc.

En cuanto a la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245, publicada el 08 de junio del 2004, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas, es decir, comprometido todo el Estado para asegurar la sostenibilidad ambiental (Ley N° 28245, 2004).

Otra norma legal importante es la Ley Marco contra el cambio climático, Ley N° 30754, promulgada el 17 de abril de 2018 que en el contexto actual del planeta, es importante que los Estados vayan implementando un conjunto de instrumentos que coadyuven al cuidado de los ecosistemas y un ambiente sano. Por ello el objeto de la ley en su Artículo N° 1 “establece principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad al cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo el carbono y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con enfoque intergeneracional” (Ley N° 30754, 2018).

Existe además una reciente Ley que modifica la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, esta Ley es la N° 30640, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y

delimitación de las cabeceras de cuenca. Esta norma legal es fundamental al tener en cuenta los lugares donde se encuentran las nacientes de agua. En la región Piura se cuenta con fuentes de agua en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, principalmente, por lo que se requiere su implementación.

Desde el campo ecológico se han venido implementando este marco legal ambiental para regular las actividades económicas que puedan dañar el medio ambiente.

2.4.2. Derecho Fundamental al agua

2.4.2.1. Definición

Para definir el Derecho Fundamental al agua es fundamental referirse primero al agua como recurso elemental.

Tal como menciona Salmón, el agua es un recurso natural, transcendental y esencial para la existencia en el planeta. El uso y acceso constituye un derecho para garantizar otros importantes derechos como la alimentación y salud. Es por tanto fundamento de otros derechos. Si bien el agua es uno de los recursos más abundantes en el mundo, solo el 2,53% puede ser utilizado para las actividades productivas del ser humano (SALMÓN, 2012).

Ahora, el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico. El contenido mínimo del derecho al agua a partir de los elementos enunciados en la definición. La disponibilidad del agua supone el abastecimiento continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Entre ellos, quedan comprendidos el consumo por boca, lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y del hogar (MARTÍNEZ & DEFELIPPE, 2013).

La cantidad de agua que hay en nuestro planeta es de 1 386 millones de km³ de la cual sólo el 2.5% es dulce y de éste, únicamente el 30.5% puede ser utilizada por el hombre, ya que el otro 69.5% se encuentra en los glaciares, en forma de hielo y en el permafrost, por tanto, únicamente hay 10.53 millones de km³ disponibles para su aprovechamiento. ((seudónimo), s.f.).

El World Water Development Report (Reporte mundial del desarrollo del agua) de la UNESCO (2003) de su World Water Assessment Program (Programa mundial para el asesoramiento del agua) indica que en los próximos 20 años, la porción de agua disponible para todos decrecerá en un 30% ((seudónimo), s.f.).

“[En América Latina] Para el horizonte 2020s, entre 7 y 77 millones sufrirán por stress hídrico debido al cambio climático [...] para mediados del siglo es probable que en el este de la Amazonía los bosques tropicales sean reemplazados por sabanas [...]” (CONDE & SALDAÑA, 2007).

El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años (un ritmo dos veces mayor que el crecimiento humano). (Ana, 2018). Así como Otro de los aspectos a destacar es el uso que se la da, esto es, el 75% se destina para la agricultura y ganadería, el 15% para la industria y tan sólo el 10% para uso doméstico del cual el 1% es para consumo ((seudónimo), s.f.).

La cantidad de agua dulce en el planeta es constante, esto es, 10.53 millones de km³, el problema está en que parte de ella se contamina, y cada día hay más y más habitantes en el planeta, por tanto, se necesita más agua y esto reduce la ración disponible para cada persona. ((seudónimo), s.f.).

Según la Autoridad Nacional del Agua, en la medida que se incrementa la población en el mundo será necesario el acceso a mayor cantidad de agua de calidad, sin embargo, la cantidad de agua que hay en el mundo no se incrementa (ANA, 2018).

2.4.2.2. El Derecho Fundamental al agua en el Derecho Internacional

Ha sido de larga data la discusión en torno al agua para que sea reconocido como derecho humano fundamental. En 2002 el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas reconoció formalmente en la Observación General 15, que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano; en este documento se lo contextualiza en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se delimitan los usos del agua que tiene la consideración de derecho humano y se concretan las obligaciones de los estados para implementarlo, garantizarlo y hacerlo viable (PLAZA, 2008).

Sin duda la publicación de la Observación General 15 fue un acontecimiento relevante que estuvo precedido por un proceso de reflexión y debate intenso en el que, de una forma u otra y con mayor o menor intensidad, participaron todos los agentes interesados en el sector del abastecimiento y saneamiento y también de la cooperación internacional; durante el mismo se produjo un cambio sustancial y nada sutil desde la consideración del agua y saneamiento como una necesidad básica, defendida por una gran parte de las instituciones de financiación internacional y los operadores privados de estos servicios, hasta la aceptación de que su satisfacción es un derecho humano básico (PLAZA, 2008).

El debate que aconteció en el proceso abarcó numerosos temas, acorde con la característica multifuncional y poliédrica del agua, que está asociada a sus numerosos usos; los temas más relevantes que enmarcaron el debate se centraron en el aspecto puramente conceptual, incardinado en lo que se entiende como derechos económicos, sociales y culturales, pero también, y no menos de forma poco relevante, incidieron consideraciones técnicas, económicas y financieras, sociales, legales y políticas, como fueron la sostenibilidad de los servicios, la privatización de los mismos, la recuperación de costes, la cooperación internacional, la gestión comunitaria, la participación de los agentes interesados y el acceso a la información, entre otros. (PLAZA, 2008).

Existen Convenciones que promueven la satisfacción del derecho al agua como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 (BERNAL, 2015).

"El Comité lo considera como un derecho adscrito a los derechos humanos a "un nivel de vida adecuado" y a la "salud física", protegidos por los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En concreto, el Comité sostuvo que la garantía del derecho al agua es indispensable para asegurar un nivel de vida adecuado, como quiera que disponer de agua es una "condición fundamental para la supervivencia"". (BERNAL, 2015).

De acuerdo con la Observación General N° 15, el Estado tiene el deber de "respetar", "proteger" y "cumplir" o "hacer efectivo" el derecho al agua (BERNAL, 2015).

Mediante 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/292. Esta resolución declaró el acceso al agua potable como un derecho humano e instó a los Estados a garantizarlo. La resolución reconoce el "derecho al agua potable y el saneamiento" como "un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". Esta misma resolución reconoció el derecho de los habitantes del mundo al saneamiento ambiental. Por último, instó a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnología para lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento (BERNAL, 2015).

Tras la Resolución 62/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas expidió la Resolución 15/9. En dicha resolución, el Consejo señaló que el derecho humano al agua y al saneamiento es parte integral del derecho internacional vigente. Asimismo, reiteró que los deberes que derivan de este derecho son jurídicamente vinculantes para los Estados. Del mismo modo, exhortó a los Estados para que, entre otras cosas, "elaboren instrumentos y mecanismos adecuados [...] para alcanzar

paulatinamente la plena realización de las obligaciones de derecho humanos referentes al acceso al agua potable segura y los servicios de saneamiento" (BERNAL, 2015).

2.4.2.3. El Derecho Fundamental al agua en el ordenamiento jurídico nacional

El Perú ha venido desarrollando este derecho jurídicamente a partir de la problemática mundial y nacional. Según un estudio de Arbulú afirma "El derecho al agua como derecho autónomo no data más allá del 2006, por lo que es un derecho en constante desarrollo en nuestro país. Es importante que el Estado garantice este derecho de manera progresiva (ARBULÚ, 2014).

El año 2017 en el Perú se aprobó y promulgó en el diario oficial el diario oficial El Peruano mediante la Ley N° 30588 con fecha 15 de junio, la reforma constitucional que incorpora el Art. 7-A referido al Derecho fundamental al agua, que a la letra dice:

"El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible" (LEY N° 30588, 2009).

Es necesario mencionar que el Perú es un país privilegiado y cuenta con 1,89% de la disponibilidad de agua dulce del mundo, siendo el país que ocupa el puesto ocho a nivel mundial y estando en América del Sur, que es la región del mundo donde se cuenta con la mayor cantidad de agua dulce en el mundo (ANA, 2018).

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Perú cuenta con tres vertientes en su territorio, con una disponibilidad de casi 2 billones de metros cúbicos de agua cada año, sin embargo, por nuestra geografía, la vertiente del Pacífico –donde reside el 66 % de la población- sólo cuenta con una disponibilidad de 2,2 % de acceso al agua (ANA, 2018).

Asimismo nuestra geografía ha determinado la existencia de 159 cuencas hidrográficas en nuestro territorio, cada una de ellas tiene sus singularidades y necesidades de gestión de recursos hídricos adecuados, por ello, la Autoridad Nacional del Agua, a través del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos viene promoviendo la creación, instalación y gestión de los consejos de recursos hídricos por cuencas como uno de los modelos de gestión del agua más eficientes y adecuados para el país. (ANA, 2018).

Por otro lado la vertiente del Pacífico tiene una disponibilidad del 2,18% del agua total, con una población del 65,98%. La vertiente del Atlántico del 97,7% del agua para una población de 30% y la vertiente del Titicaca la disponibilidad del 0,56% para una población de 3,26% (ANA, 2018).

Los factores como el calentamiento global, la mala distribución del recurso, entre otros, han desencadenado una creciente escasez que ha impactado decididamente en el Derecho y la forma en que este regula el agua (SALMÓN, 2012).

2.4.2.4. Análisis sobre la normatividad del agua en el Perú

El Estado peruano mantiene un conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad la planificación y cuidado de los recursos hídricos, conscientes de ese potencial del país, las instituciones encargadas deben garantizar de manera sostenible el suministro de recursos hídricos en el sentido amplio de la realidad. Esto es, el cuidado de las fuentes de agua y de esa manera los sectores como la agricultura, población, la agroindustria no se vean afectadas. Hay instituciones que de manera constante deben garantizar el suministro de los recursos hídricos, pero a su vez el cuidado de esas fuentes puesto que hay una apuesta por el desarrollo sostenible de las distintas actividades como la agricultura, el abastecimiento a la población, a las necesidades de infraestructura y la industria, siempre de calidad.

De esa manera “El enfoque con respecto al agua ha evolucionado en las últimas décadas desde la concepción de ésta como un bien económico a la de un derecho humano. El cambio de paradigma se debió principalmente a la importancia que este recurso tiene para la supervivencia del ser humano lo cual no era cumplido cabalmente si se lo abordaba desde una perspectiva puramente económica” (SALMÓN, 2012).

Siendo la Constitución Política del Perú de 1993 la carta magna por la cual se rige todo el ordenamiento jurídico nacional, el Estado peruano en su Artículo 66° contempla que los “recursos naturales [...] son patrimonio de la nación”. De esa forma los recursos hídricos, en toda su complejidad, forman parte de ese patrimonio nacional.

En ese marco se ha diseñado el conjunto de normas legales y administrativas que organizan y protegen el agua como recurso fundamental para las distintas actividades humanas. La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), aprobada en el año 2009 en el Artículo 99° establece los instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos a) La Política Nacional Ambiental; b) La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; c) El Plan Nacional de los Recursos Hídricos; y d) Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas. Toda una planificación en torno a la importancia de los recursos hídricos para las actividades económicas y para todo el Estado.

Estos instrumentos son esenciales en el cuidado de los recursos hídricos, así como la importancia que le proporciona el Estado a los recursos hídricos para el desarrollo del país y en una idea de sostenibilidad puesto que el agua constituye un derecho que determina a otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la integridad física, etc.

Y tiene como objetivo general “lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional que permita satisfacer las demandas presentes y futuras, así como garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico y su aprovechamiento eficiente y sostenible; con criterios de equidad social, económico ambiental” (ANA, 2018).

El texto de la Ley de Recursos Hídricos (2009) precisa en el Artículo 2° que el agua constituye el patrimonio de la nación. Además, crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo objetivo será articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación en los ámbitos de las cuencas, los ecosistemas y los bienes asociados.

Contar ahora con una adecuada gestión del agua es imperativo para que el país se adapte a los impactos del calentamiento global (CANNOCK, 2016). Como se ha mencionado, durante las últimas décadas, los efectos del calentamiento global arrojan al derecho, que forma parte del Estado retos en el cuidado de recursos fundamentales y esos están en relación con principios éticos materiales que todo ordenamiento jurídico debe acoger.

La entidad encargada de la gestión y planificación de los recursos hídricos es la Autoridad Nacional del Agua.

2.4.3. Estado Constitucional de Derecho:

2.4.3.1. Definición:

Muy a menudo utilizamos el concepto de Estado de Derecho, para hacer referencia fundamentalmente al principio de legalidad, es decir al sometimiento del poder a las leyes y normas previamente establecidas. En tal sentido, diremos que en tal o cual país hay Estado de Derecho, cuando en aquel, sus autoridades ejercen el poder de acuerdo a las leyes. Sin embargo, este concepto resulta a todas luces insuficiente hoy en día, pues no basta con que las autoridades y el Estado ajusten su actuación a la ley en general, pues urge que también y fundamentalmente adecuen el ejercicio del poder a la Constitución (RUIZ, 2009).

El Estado Constitucional permite garantizar a plenitud la dignidad de la persona humana; la cual es el fin supremo de la sociedad y el Estado (GARCÍA T. V., 2014).

2.4.3.2. Elementos del Estado Constitucional de Derecho:

A) Carácter vinculante de la Constitución:

La Constitución Política si bien es una norma política en la medida que organiza y limita el ejercicio de poder, es fundamentalmente una norma jurídica vinculante para todos los poderes públicos y para los propios particulares sin excepción alguna (RUIZ, 2009).

En efecto, “toda norma que quiera llamarse realmente Constitución debe ser concebida como un instrumento jurídico dirigido a limitar efectivamente el ejercicio del poder, en particular del poder político”. Señala Castillo Córdova, que “esta finalidad intrínseca a toda Constitución no podría ser posible si el texto constitucional no es considerado como un texto normativo, es decir, si es considerado como una simple declaración, sin que genere una necesaria y efectiva vinculación a sus destinatarios, particularmente al mismo poder político en sus distintas manifestaciones, ejecutiva, legislativa y judicial” (RUIZ, 2009).

B) Supremacía o superioridad jerárquica en el sistema de fuentes:

La Constitución no sólo es una norma jurídica, sino que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, es la norma de mayor importancia en el sistema de fuente del Derecho, cuyos efectos irradia a todo el ordenamiento jurídico. De ahí que Prieto Sanchís señale con propiedad que ella condiciona la validez de todos los demás componentes del orden jurídico, y que representa un criterio de interpretación prioritario. Ello solo es posible, gracias “a la omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria” (RUIZ, 2009).

Para Castillo Córdova, se considera a la Constitución como la norma jerárquicamente superior, por encima de las demás normas que conformen el ordenamiento jurídico peruano. Esto significa que “la ley o la norma reglamentaria deberán de ajustarse a la Constitución si pretenden ser válidas y regir efectivamente. Ninguna norma con rango de ley ni mucho menos con rango de reglamento, podrán disponer de modo distinto a lo que dispone la Constitución” (RUIZ, 2009).

El fundamento constitucional de esta característica la encontramos en el artículo 51 de la Constitución. Según esta norma, “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente [...]”. Esta disposición es recogida y reiterada en el artículo 138, a propósito del control difuso, y precisa que “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera” (RUIZ, 2009).

C) Eficacia y aplicación inmediata de la Constitución:

En efecto, si la Constitución es una verdadera norma suprema, ello supone que no requiere su desarrollo legislativo para desplegar su fuerza vinculante, en la medida en que los preceptos constitucionales sean relevantes en un proceso cualquiera, su aplicación resultará obligatoria (RUIZ, 2009).

Como señala De Otto, uno de los problemas clave de los ordenamientos en los que la Constitución tiene verdadero valor de norma jurídica es el de si resulta o no aplicable por los órganos llamados a aplicar el ordenamiento, fundamentalmente por los jueces -eficacia directa- o si, por el contrario, constituye sólo un mandato dirigido al legislador y que solo afectará a la actividad de los demás órganos del Estado en la medida en que se haya incorporado a las leyes -eficacia indirecta². Como agrega De Otto, se trata en definitiva, si la Constitución es en sí misma fuente de derecho (RUIZ, 2009).

Para este autor, la opción por un sistema u otro de eficacia tiene una enorme influencia sobre la operatividad de la Constitución. En cada caso serán diferentes las consecuencias. Si la Constitución solo obliga directamente al legislador, y a los demás únicamente de modo indirecto, en cuanto están sometidos a la ley, la acomodación del contenido del ordenamiento a las prescripciones constitucionales dependerá de aquél y, en consecuencia, la única garantía posible será el control de

constitucionalidad de la ley. En otras palabras, la Constitución solo estará presente en el ordenamiento jurídico por mediación del legislador y del órgano que lleve a cabo el control de constitucionalidad de la ley (RUIZ, 2009).

Por el contrario - siguiendo a De Otto-, la eficacia directa de la Constitución implica que los jueces, y en general todos los llamados a aplicar el derecho, habrán de tomar la norma constitucional como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma, con las siguientes consecuencias: a) dado que la Constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las leyes y cualquiera normas para comprobar si son o no conformes a la Constitución; b) habrán de aplicar la norma constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución (RUIZ, 2009).

D) La garantía jurisdiccional de la Constitución:

La denominada garantía jurisdiccional o judicial, no es otra cosa que la exigibilidad judicialmente o jurisdiccional de la Constitución. Esto significa que la primacía de la Constitución, como la de cualquier otra normatividad, es jurídicamente imperfecta si carece de garantía jurisdiccional y, concretamente, si la constitucionalidad de las decisiones y actos de los poderes públicos no es enjuiciable por órganos distintos de aquellos que son sus propios actores. (RUIZ, 2009).

En efecto, la garantía jurisdiccional no es otra cosa que la exigibilidad jurisdiccional del cumplimiento de la Constitución. Esto implica reconocer la competencia de los jueces para resolver litigios desde el ordenamiento jurídico incluido la Constitución, pudiendo concretarse a través del control concreto y del control abstracto, y a priori y a posteriori, encomendado a órganos especializados o a los jueces ordinarios (RUIZ, 2009).

En otras palabras, en aquellos casos en que algún funcionario público o un particular desconocen o incumple una norma constitucional, se encuentran expeditos los procesos constitucionales para la defensa de la Constitución Política. En efecto, significa que con la finalidad de proteger y hacer eficaz lo señalado por la Constitución (derechos, valor o principio constitucional), existe una jurisdicción o una justicia especializada: la constitucional. La razón de esta garantía de la Constitución es que ésta es una norma jurídica, y como tal, tiene una garantía que resguarda su ejecución (RUIZ, 2009).

Hablar de garantía jurisdiccional de la Constitución es hacer referencia a los mecanismos de defensa de la Carta Política, los cuales se materializan en el control. No le falta razón a Manuel Aragón cuando precisa que “el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo”. Agrega este autor, “que solo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa, y sólo si el control forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida ésta como norma” (RUIZ, 2009).

El fundamento de esta garantía jurisdiccional de la Constitución lo encontramos en principio, en los artículos 200 para el caso del control concretado y el artículo 138 para el caso del control difuso. En nuestro país, tal garantía constitucional está compartida entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. (RUIZ, 2009).

E) Denso contenido normativo:

Este es quizá uno de los principales rasgos que diferencian el Estado de Derecho del Estado Constitucional de Derecho. A diferencia del primero, el segundo esta caracterizado por un denso contenido normativo que está formado por principios, derechos y directrices, más o menos precisos, aplicables a los casos concretos, siempre que resulten relevantes. (RUIZ, 2009).

Este elemento del constitucionalismo es de suma importancia pues supone pasar de una concepción formal de la constitución a una concepción material de la Constitución, la cual se convierte en un criterio sustancial de validez de las normas expedidas por el legislador, el poder político y de las resoluciones de los jueces. Esto supone no solo respetar un conjunto de procedimientos democráticos

mayoritarios para tomar decisiones, sino que los contenidos de dichas decisiones debe estar ajustado a los principios, derechos, valores y directrices contenidas en la Constitución Política. (RUIZ, 2009).

El Congreso, el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial, si bien son titulares de un conjunto de competencias, no tienen un poder omnímodo e ilimitado. Existen condiciones sustanciales de validez contenidas en la Constitución Política que su actividad legislativa, administrativa y jurisdiccional debe respetar, si queremos ser coherentes con el Estado Constitucional de Derecho. Nos referimos a un conjunto de normas sustanciales que condicionan la validez sustancial de las leyes, ya sea que dichas normas impongan límites, como en el caso de los derechos de libertad, o que impongan obligaciones, como en el caso de los derechos sociales. (RUIZ, 2009)

Ciertamente, las normas formales y las normas sustanciales se encuentran en todas las Constituciones. En la primera parte de las mismas se encuentran las normas sustanciales que sancionan, a través de los derechos fundamentales y los fines del ordenamiento (parte dogmática). En las partes sucesivas se encuentran las normas formales que instituyen a los órganos del Estado, en tanto instrumentos para la observancia de dichos derechos (parte orgánica). Siguiendo a Ferrajoli⁴³, el Estado Constitucional de Derecho, modelo adoptado por nuestra Constitución, se configura como el instrumento constituido por el conjunto de estas normas, gracias a las cuales todos los poderes se encuentran sujetos a la ley, en el doble sentido que todos los poderes, también aquellos de mayoría, sólo pueden ejercerse en las formas establecidas por las normas formales y están, además, sujetos a normas sustanciales que imponen límites y vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de todos los individuos. (RUIZ, 2009)

F) Rigidez constitucional:

Esta es también una característica de todo Estado Constitucional de Derechos y constituye una herramienta para defender la vigencia de la Constitución. Según Prieto Sanchís, el constitucionalismo, es decir la vigencia de la Constitución resulta más fuerte cuanto más costosa sea la alteración del texto, es decir, cuanto más inaccesible se muestre frente a la mayoría legislativa⁴⁴. Como señala con propiedad Castillo Córdova, solo será posible considerar a la Constitución como una norma fundamental de modo que la ley -y consecuentemente, tampoco el reglamento pueda contraponérsele eficazmente- si es que se considera a la Constitución como una norma rígida. (RUIZ, 2009).

La cobertura constitucional de este elemento se encuentra en el artículo 206⁴⁶ de la Constitución, disposición que establece los procedimientos para modificar la Constitución Política. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que “es indubitable que en un sistema jurídico que cuenta con una Constitución rígida, ninguna ley o norma con rango de ley (como las leyes orgánicas) tiene la capacidad para reformar, modificar o enmendar parte alguna de la Constitución”. (RUIZ, 2009).

2.4.3.3. Obligaciones del Estado Constitucional de Derecho:

a) La de resguardar la dignidad de sus miembros

Plantea la obligación de afirmar la condición humana. Para tal efecto, debe velar por la custodia, estima y apoyo heterónomo para su realización acorde con la peculiar naturaleza de los hombres (GARCÍA T. V., 2014)

b) La de promover el desarrollo y el mantenimiento de un orden basado en justicia.

Plantea la obligación de promover un proceso sistémico de cambio en las estructuras de la sociedad, que permitan el crecimiento en el ingreso y que el producto per cápita redunde equitativamente en un aumento del bienestar general; así como al establecimiento de un sistema normativo que acondicione la posibilidad de una coexistencia pacífica y con vocación de justicia. (GARCÍA T. V., 2014)

En el Perú, los deberes primordiales del Estado están consignados en el artículo 44 de la Constitución.

En suma, el Estado es un instrumento al servicio del hombre que completa su dignidad. No cabe ninguna duda de que la sociedad política se constituye para servir al ser humano y permitirle llevar una existencia civilizada en la que pueda desenvolver sus capacidades físicas, intelectuales y morales. Así, el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado (GARCÍA T. V., 2014).

Mérito significativo de los constituyentes de 1979 fue el haber consignado este criterio en el artículo 1 de la Constitución que elaboraron. El texto vigente ha mantenido los lineamientos de dicha concepción. (GARCÍA T. V., 2014).

2.4.4. La minería en el Perú:

2.4.4.1. Definición:

Actividad económica referida al aprovechamiento de las minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del domicilio marítimo, incluyendo los recursos geotérmicos. Se exceptúan del ámbito, el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos de guano y las aguas minero-medicinales (D. Leg N° 109, 1992).

2.4.4.2. Contexto de la minería en el Perú:

En el Perú ha habido una evolución respecto al desarrollo de actividades extractivas a lo largo de su historia. En los últimos decenios estas actividades han aumentado. Según (BACA, 2013) nos dice “Una de las principales apuestas de las políticas del Consenso de Washington implementadas con fuerza en el Perú, desde inicios de los años 90, fue promover las inversiones en el sector minero. Para ello, se diseñó un marco normativo muy atractivo para las inversiones, con facilidades y beneficios tributarios a los que se sumaban los contratos de estabilidad tributaria y administrativa”.

Estos años de crecimiento económico en el Perú vino acompañado con la apertura de concesiones. “La evolución de las concesiones mineras muestra que este sistema casi automático de entrega de concesiones mineras ha llevado a un crecimiento acelerado y desordenado de éstas en el territorio nacional” (BACA, 2013).

El Decreto Legislativo 708 Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero implicó un cambio fundamental en la política minera nacional, no sólo porque permitió liberar derechos mineros que concentraba el Estado e iniciar la modernización del régimen de concesiones, sino porque planteó una serie de criterios para que la política económica fuese funcional al desarrollo de la minería. (VINCES & MALCA, 2015).

Sin embargo, las concesiones han sido entregadas de manera que se puede calificar de manera arbitraria. Las normas mineras están enmarcadas desde la Carta Magna y a partir de esas potestades se desarrolla una política minera. El Artículo 66° de la Constitución Política del Perú de 1993, referente a esto, dice lo siguiente:

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

En base al texto constitucional, el Estado tiene la potestad de otorgar las concesiones para la explotación de los recursos naturales.

Como manifiesta Baca, según la Ley General de Minería, para el inicio de las actividades de un proyecto minero, además del Título de Concesión, se requiere contar con los Estudios Ambientales aprobados. Sin embargo, en base al siguiente artículo de la Constitución Política del Perú, Artículo 67° se hace mención respecto de la Política Ambiental: El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales (BACA, 2013).

Y, por tanto, la entrega de concesiones no puede ser de forma deliberada o arbitraria, sino que debe estar integrada a un conjunto de parámetros y procedimientos. “Se debe precisar que el otorgamiento de la concesión minera solo da el derecho, y que para desarrollar la actividad minera de exploración y explotación se requiere contar con una certificación ambiental, permiso o licencia de agua [...]” (BACA, 2013).

El aumento de las concesiones mineras durante los últimos ha aumentado que incluso en lugares el porcentaje de territorio es altísimo. “Como consecuencia de este proceso, hay provincias cuyos territorios han sido concesionados hasta en un 70% a 80% (provincia de Chumbivilcas en 85 %, Grau en 62%, Antabamba en 60% y los distritos de Baños del Inca y La Encantada en 100%” (BACA, 2013).

En Ayabaca se han hecho concesiones mineras en zonas de ecosistemas frágiles: páramos y bosques de neblina. Mediante Decreto Supremo N° 024-2008-DE, se declara de necesidad pública.

Esta norma legal fue otorgada por el Poder Ejecutivo, tras desconocer la Consulta Vecinal realizada el 16 de setiembre del 2007, queriendo imponer el proyecto Río Blanco a pesar de la decisión de la población que en 95% dijo no a la actividad minera y a favor del cuidado de los páramos y bosques de neblina, del agua, el desarrollo sostenible como la agricultura.

Tal y como lo muestran las estadísticas de los últimos años, en el Perú se han hecho concesiones mineras de manera exagerada sin tener en cuenta criterios fundamentales como la factibilidad. En el territorio de la provincia de Ayabaca, se han entregado más de 15 concesiones al proyecto Río Blanco para la explotación de molibdeno y cobre (principalmente) pero sin un estudio ambiental serio, pues dañaría de manera irremediable un amplio ecosistema frágil que abastece de agua a la provincia de Ayabaca y buena parte de la región Piura.

2.4.4.3. Las Concesiones mineras:

En sentido lato, la concesión minera proviene de un acto jurídico administrativo emanado de la autoridad competente, que autoriza a realizar una actividad exploración, desarrollo-explotación, o de beneficio, labor general o transporte minero, según sea el caso (BELAÚNDE, 2011).

En un sentido estricto, la concesión minera se limita a las tres primeras actividades. Cuando hablamos de un acto jurídico nos referimos a una manifestación de voluntad de un ente jurídico administrativo nos referimos a una manifestación de voluntad de un ente público que crea, extingue o modifica derechos a favor de los particulares pero también, en ciertas circunstancias, a favor del propio Estado o de organismos vinculados al Estado. Por lo tanto en el plano doctrinario es una declaración especial de voluntad de un órgano del gobierno, enmarcada dentro de requisitos formales muy particulares, que otorga determinados derechos para satisfacer un interés público así como un interés privado (BELAÚNDE, 2011).

La concesión minera en un sentido amplio es un acto jurídico administrativo expedido por la autoridad minera competente, de carácter subjetivo, enmarcado dentro de una legislación preexistente, obligatorio y que requiere forzosamente de la petición del interesado formulado con arreglo a los requisitos establecidos en la ley (BELAÚNDE, 2011).

2.4.4.4. El Estudio de impacto ambiental:

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es un documento técnico de carácter interdisciplinar que está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir las consecuencias de los efectos ambientales que determinadas acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad del hombre y su entorno.

Ley General del Ambiente establece que el SEIA es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional, el MINAM.

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N°27446) crea el SEIA como herramienta transectorial de gestión ambiental y de carácter preventivo. Incluye la ley, que incorpora precisiones del alcance del SEIA y nuevos instrumentos, y el reglamento, que regula el procedimiento de elaboración, evaluación y control de instrumentos del SEIA.

2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis General

Las normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera metálica relativas a las concesiones mineras y el estudio de pacto ambiental vulneran el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca en cuanto a su contenido normativo y obligaciones, ya que no son adecuadas permitiendo que el desarrollo de la actividad minera ocasione un perjuicio a este elemento.

2.5.2. Hipótesis Específica

La debilidad que presenta el Estado Constitucional peruano es que prioriza la actividad extractiva minero- metálica subordinando las normas jurídicas que protegen los recursos hídricos en la provincia de Ayabaca.

2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

2.6.1. Definición Conceptual

Hipótesis General: Las normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera metálica relativas a las concesiones mineras y el estudio de pacto ambiental vulneran el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca en cuanto a su contenido normativo y obligaciones, ya que no son adecuadas permitiendo que el desarrollo de la actividad minera ocasione un perjuicio a este elemento.

a. Variable Independiente: Normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera relativas a las concesiones mineras y el estudio de pacto ambiental.

V.I. 1.- Concesión minera: “Entrega de derechos mineros a partir del conjunto de normas a terceros, sean públicos o privados”.

V.I. 2.- Estudio de impacto ambiental: “Instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental”.

b. Variable Dependiente: Vulneración del Derecho Fundamental este al Agua en cuanto a su contenido normativo y obligaciones.

V.D. 1.- Derechos fundamentales: “Aquellos derechos inherentes al ser humano, pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana que disfrutan estatus especial en cuanto a garantías de tutela”

V.D. 2.- Contenido normativo del derecho fundamental al agua: “Garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado por ser condición necesaria para la supervivencia”.

V.D.3.- Obligaciones que se desprenden del derecho fundamental al agua: “Deber constante y continuo de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del mismo”.

Hipótesis Específica: El Estado Constitucional peruano prioriza la actividad extractiva minero-metálica toda vez que subordina las normas jurídicas que protegen los recursos hídricos en la provincia de Ayabaca.

a. Variable Independiente: El Estado Constitucional de Derecho peruano prioriza la actividad extractiva minero- metálica.

V.I. 1.- Estado Constitucional de Derecho: Modelo de Estado en el que tiene como primer pilar y guía la Constitución Política, documento más importante de todo el conjunto de normas del ordenamiento jurídico y por tanto el respeto de los derechos fundamentales de las personas, instituciones y entidades.

V.I. 2.- Actividad extractiva minero-metálica: “Actividad económica no sostenible que consisten en la extracción de minerales del subsuelo a través de métodos como tajo abierto”.

b. Variable Dependiente: Subordinación de principios constituciones y normas jurídicas que protegen el agua en la provincia de Ayabaca.

V.D. 1.- Subordinación de principios constitucionales y normas jurídicas: “‘Sometimiento de postulados o proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica, que por tales constituyen parte del núcleo central del sistema constitucional”.

V.D. 2.- Normas de protección del agua: “Conjunto de normas legales que regulan, protegen y sistematizan el agua”.

2.6.2. Operacionalización

- Hipótesis General:**

Variables	Dimensiones	Definición Conceptual	Indicadores	Fuente
Variable independiente: Normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera metálica relativas a las concesiones mineras y el estudio de pacto ambiental.	D1: Concesiones mineras	Entrega de derechos mineros a partir del conjunto de normas a terceros, sean públicos o privados.	- Derechos mineros - Sistema de entrega de concesiones.	Doctrina, Legislación
	D2: Evaluación de impacto ambiental	Procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo o rechazarlo.	- Procedimiento técnico-administrativo. - Impactos ambientales.	Doctrina, Legislación
Variable dependiente: Vulneración del Derecho Fundamental al Agua	D3: Derechos fundamentales	Aquellos derechos inherentes al ser humano, pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana que disfrutan estatus especial en cuanto a garantías de tutela.	- Persona - Dignidad humana - Estatus - Garantías - Tutela	Doctrina, Legislación

	D4: Contenido normativo del derecho fundamental al agua	Garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado porque es condición necesaria para la supervivencia.	- Disponibilidad - Calidad - Accesibilidad - Asequibilidad - No discriminación	Doctrina, Legislación
	D5: Obligaciones que se desprenden del derecho fundamental al agua.	Deber constante y continuo de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del mismo.	- Generales - Específicas	Doctrina, Legislación

• **Hipótesis Específica:**

Variables	Dimensiones	Definición Conceptual	Indicadores	Fuente
Variable Independiente: El Estado Constitucional de Derecho peruano prioriza la actividad extractiva minero-metálica.	D1: Estado Constitucional de Derecho	Modelo de Estado que tiene como primer pilar y guía la Constitución Política y el ordenamiento jurídico y por tanto el respeto de los derechos fundamentales de las personas, instituciones y entidades.	- Constitución Política - Ordenamiento jurídico - Derechos fundamentales	Doctrina, Legislación
	D2: Actividad extractiva minero-metálica	Actividad económica no sostenible que consisten en la extracción de minerales del subsuelo a través de métodos como tajo abierto.	- Actividad económica no sostenible, - Extracción de minerales del subsuelo.	Doctrina, Legislación
Variable Dependiente: Subordinación de principios constitucionales y normas jurídicas que protegen el agua en la provincia de	D3: Subordinación de principios constitucionales y normas jurídicas	Sometimiento de postulados o proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica, que por tales constituyen parte del núcleo central del sistema constitucional.	- Sometimiento - Postulados - Proyección deontológica - Sistema Constitucional.	Doctrina, Legislación

Ayabaca.	D4: Normas de protección del agua	Conjunto de normas legales que regulan, protegen y sistematizan el agua”.	<ul style="list-style-type: none"> - Normas legales - Regulación del agua - Protección del agua, -Sistematización del agua. 	Doctrina, Legislación
----------	-----------------------------------	---	---	-----------------------

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE

La investigación es de carácter cualitativo, puesto que ha tenido como finalidad comprender el fenómeno de estudio en su contexto e identificado la naturaleza profunda de la realidad, su estructura y relaciones para cumplir tareas fundamentales de toda investigación: recoger datos e interpretarlos, los aspectos que se han tenido en cuenta en el momento de la recolección de datos. Además, permite que se amplíe la visión del Derecho Fundamental agua en la provincia de Ayabaca en el momento que nuestra Constitución Política lo ha incorporado en su texto.

3.2. DISEÑO

El diseño es no experimental, porque la presente investigación ha tenido a bien analizar la situación actual de las normas mineras que ponen en riesgo el agua como un derecho fundamental para la provincia de Ayabaca.

El diseño de investigación es además documental ya que los datos que han servido para poder responder al problema de investigación, en principio se han obtenido de una fuente de información como la Ley N° 30588, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, y el conjunto de normas relacionadas al tema de investigación.

3.3. NIVEL

La presente tesis es de carácter descriptivo, ya que se ha buscado y analizado información que permita desarrollar y determinar el contenido de las normas que colocan en un estado de vulnerabilidad los recursos hídricos de la provincia de Ayabaca y por tanto del Derecho Fundamental al agua con la finalidad de presentar una adecuada fundamentación del cuidado de este recurso y su protección.

3.4. TIPO

El tipo de estudio que se ha utilizado en la presente investigación ha sido el explicativo, con la finalidad de demostrar que en base a la reforma constitucional de la Ley N° 30588 y del conjunto de normas jurídicas relacionadas, debe abordarse la problemática para la garantía del cuidado del agua en la provincia de Ayabaca; considerando que el derecho fundamental al agua debe primar y es la garantía para otros derechos.

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

- **Método Científico:** La investigación coloca en acción los pasos que ayudan el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis y la puesta a contrastación para verificar su verdad o falsedad, asimismo logra la sistematización de los conocimientos generando un acercamiento a conceptos jurídicos que referidos a problemas sociales y jurídicos.
- **Método deductivo:** Con ayuda de los principios generales como los derechos fundamentales, se aborda y explica hechos y fenómenos particulares en la afectación de derechos como el agua y otros conexos.
- **Método inductivo:** Este método parte de lo singular para llegar a lo general. Se utiliza en el planteamiento de principios o leyes generales en función de hechos particulares, como son los resultados de las observaciones. A partir de la observación de la realidad en la provincia de Ayabaca, de sus riquezas en recursos hídricos y ecosistemas en relación con derechos generales y fundamentales que deben irse implementando seriamente, como es el derecho al agua, que forma parte de lo constitucional del ordenamiento jurídico nacional.

- **Método histórico:** Toma en cuenta la evolución de normas jurídicas a lo largo del tiempo y cómo éstas han venido produciéndose hasta llegar al contexto jurídico actual que coloca en riesgo derechos muy importantes.
- **Método dogmático:** Se realiza mediante la interpretación de las normas vigentes.
- **Método lógico o de la ratio legis:** Con la teoría vigente que se viene produciendo en cuanto a los derechos fundamentales se interpreta la normatividad que tiene el Estado para comparar y llegar a conclusiones teóricas que ayuden a plasmar esos derechos. Se han utilizado, por tanto, las leyes y teorías existentes sobre el tema de investigación.
- **Método comparativo:** La contrastación es un instrumento valioso para la interpretación jurídica y avance del derecho. A partir de la realidad en cuanto a problemas ambientales, la humanidad enfrenta el desafío de la supervivencia a partir del cuidado de su ambiente. Diferentes países vienen implementando el derecho fundamental al agua. Este método ha permitido comparar y enriquecer doctrinaria y normativamente este derecho.
- **Método analítico:** Se han analizado textos jurídicos y su aplicación real frente a hechos descritos sobre la afectación del derecho fundamental al agua, se toma en cuenta las relaciones con diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
- **Método sintético:** Ha permitido integrar, reunir y recomponer los elementos y los aspectos esenciales presentes en la teoría y en la realidad a la que deben sujetarse las normas para cuidar y garantizar el derecho fundamental al agua.

El procedimiento utilizado en la investigación es el de análisis documental – bibliográfico; a fin de fundamentar científicamente la tesis se hace uso de libros, informes, estadísticas, periódicos, revistas y publicaciones.

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica empleada en la presente investigación, ha sido aquella que privilegie los documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación, por lo que se ha empleado lo siguiente:

- **Fichaje:** A través del fichaje bibliográfico se compila todo lo que se ha escrito directa o indirectamente sobre el derecho fundamental al agua en relación con la problemática que enfrenta la provincia de Ayabaca ante la amenaza de explotación minera en ecosistemas frágiles que producen el recurso vital. Asimismo sobre la incapacidad regulada en nuestra normativa, sus críticas y defensas, llegando a tener una postura respecto a la investigación.
- **Recolección y Análisis de datos:** Por medio de esta técnica se analiza minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación.

La información que se recopila se procesa de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. Asimismo los datos obtenidos son analizados detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.

3.7. ASPECTOS ÉTICOS

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **GRAMSCI DE JESÚS ZEGARRA FLORES** identificada con DNI N° **46994208**, en la condición de Estudiante () Egresante () Egresado (x), de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliado en **A.H. PUEBLO LIBRE Mz. A. Lote 1** Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, Celular: **969578925**, Email: **gramscidejesus@gmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura, 29 de mayo del 2019

DNI N° 46994208

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

CAPÍTULO IV: PROBANZA DE HIPÓTESIS

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación; el mismo que se desarrolló en base al estudio exhaustivo de la normatividad vigente del Estado peruano, la jurisprudencia y la doctrina, se pudo lograr una interpretación de la Ley 30588, Ley de reforma constitucional que incorpora el derecho fundamental al agua a la Constitución Política del Perú de 1993. En este capítulo se analizará y se logrará demostrar la hipótesis en la cual se basa la investigación.

4.1. PROBANZA JURÍDICO SOCIAL-DOCTRINAL

El Derecho fundamental al agua es novedoso y de reciente debate en nuestro ordenamiento jurídico nacional debido a un problema mundial de calentamiento global y el riesgo de pérdidas de ecosistemas importantes en la provincia de Ayabaca. Para ello es necesario seguir situando la problemática social y del Estado Constitucional peruano.

“Nos encontramos en una crisis planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad. La ciencia ha llegado a consensos que bordean lo unánime. Tenemos un breve umbral de 12 años para hacer cambios nunca antes vistos en prácticamente todos los sectores de la vida de nuestras sociedades. La producción y el consumo tienen que modificarse pero también nuestras formas de interactuar con nuestro territorio. La contaminación por gases de efecto invernadero debe reducirse drásticamente, la extracción masiva de bienes de la naturaleza debe parar, los bosques y ecosistemas deben ser protegidos como patrimonio y sus servicios ambientales resguardados. Todo esto para que el cambio climático no haga que la temperatura promedio del planeta supere los 1,5 ° C que traiga consigo el colapso de diversos ecosistemas y formas de vida. A pesar de los discursos políticos el Estado peruano no escapa de esto sino que se encuentra en el ojo de la tormenta. Esto debido a que será uno de los territorios más impactados, sea por su megadiversidad o por sus ecosistemas encontrados en pequeños y frágiles espacios geográficos” (O'DIANA, 2019).

Cabe señalar que la implementación de una institucionalidad jurídica, esto es, de normas constitucionales y legales deben responder a esa problemática que garanticen la sostenibilidad del agua como recurso fundamental pero principalmente a zonas de ecosistemas con mayor fragilidad.

Para ello Fidel Torres, biólogo especialista en temas de ecosistemas frágiles menciona: “En la actualidad existe una planificación de grandes proporciones de explotación de minerales metálicos en el territorio de las cuatro cuencas que dinamizan el ciclo hidrológico del departamento de Piura. El más relevante de este proyecto que se pretende emprender es el de extracción de cobre mediante la tecnología de tajos abiertos en las zonas de bosques de neblina y páramos en las nacientes de los ríos Quiroz y Chinchipe lo que generaría un inevitable proceso de desertificación en una de las zonas de mayor actividad agraria y presencia de bosques naturales en el norte del Perú” (TORRES, 2005), con lo cual se encuentra amparado en una normatividad que no ayuda a la protección de las nacientes de agua en la provincia de Ayabaca.

A su vez según Carlos Monge señala que “en la actualidad el Perú desarrolla un marco institucional en el que la promoción de la inversión lo es todo, pesa más que cualquier otro consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas concentra todas las decisiones incluidas la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental. El Ministerio del Ambiente está pintado en la pared y los gobiernos locales y regionales no existen” (BACA, 2013).

Las nacientes de agua de las cuencas en la provincia de Ayabaca son fundamentales para el abastecimiento, disponibilidad, acceso y calidad del agua. En una analogía coloquial pero valedera es como matar a la gallina de los huevos de oro, por lo que “la minería metálica como actividad extractiva de alta intensidad en un escenario caracterizado por sequías periódicas no solo competirá con el agua que también requiere grandes cantidades sino además provocará disminución de su

disponibilidad e inevitable contaminación” (TORRES, 2005), que incluso se ha promulgado la ley que referida a los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca.

4.1.1. PROBANZA HIPÓTESIS GENERAL

En este punto se tendrá en bien analizar los indicadores de las hipótesis con la finalidad de comprobarla así como el objetivo general.

Hipótesis: Las normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera metálica, relativas a las concesiones mineras y estudio de impacto ambiental vulneran el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca en cuanto a su contenido y obligaciones, ya que no son adecuadas permitiendo que el desarrollo de la actividad minera ocasione un perjuicio a este elemento.

- **Concesiones mineras:**

De la Ley General de Minería se puede analizar que la figura de la concesión minera, a través de un procedimiento se otorga un derecho a un tercero, lo cual se dice “En la actualidad las concesiones generan un derecho real y se entregan al inicio del proceso de exploración, como consecuencia el concesionario es propietario del producto extraído. Además aún cuando en fases posteriores de la toma de decisiones: consulta previa, audiencia de estudio de impacto ambiental, se rechaza la viabilidad de un proyecto minero las empresas mantienen sus concesiones. Además al entregarse por periodos largos de tiempo y sin mayores exigencias las concesiones son materia de alquiler, compra-venta o especulación por parte de los concesionarios. Junto con revisarse la naturaleza misma de la concesión para que el Estado no pierda soberanía sobre el recurso extraído la concesión debe entregarse sólo después que el proyecto minero haya pasado por el proceso de consulta previa, libre e informada y se le haya el respectivo Estudio de Impacto Ambiental y debe entregarse por periodos más cortos y contra compromisos y planes concretos de exploración e inversión impidiéndose su compra-venta y su uso especulativo” (PERÚ, 2019).

Es por ello que la figura de la concesión minera debe regularse, mostrar un contenido responsable. La Red Muqui, institución que estudia estos temas establece que “la entrega de concesiones se realiza de manera prácticamente automática. La solicitud requiere sólo de datos básicos de ubicación geográfica del denuncia y de la persona natural o jurídica que lo solicita, así como de una declaración jurada de las actividades que se piensa desarrollar”. (MUQUI, 2018).

Concesiones Mineras

Provincia de AYABACA

32.9%*

Estado de las Concesiones Mineras

- Concesión Minera Titulada
- Concesión Minera en Trámite

* Área concesionada considerando cc.mm. superpuertas, & sin considerar cc.mm. ecintitas

N

Escala: 1:540,000

Proyección UTM Z18

Fuente: INGEMMET

Noviembre 2016

Región Piura

Acción Solidaria para el Desarrollo

El INGEMMET al otorgar concesiones mineras en gran parte de un territorio o distrital es el que en la práctica termina estableciendo el uso del territorio con fines de explotación minera sin ningún tipo de consulta. Es decir, en ausencia de orientaciones y metodologías vinculantes de Ordenamiento Territorial. (MUQUI, 2018).

Por su parte el Tribunal Constitucional ha precisado que una concesión minera, al no conceder derecho de propiedad a su titular, puede experimentar modificaciones. Detentar la titularidad de una concesión no otorga derecho de propiedad respecto del terreno. En esos términos se expresó el Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 01503-2013-PA/TC. (LEY, 2017).

De no existir la implementación de instrumentos que ayuden al carácter planificador del Estado, la vulneración a múltiples derechos fundamentales es latente, es por ello que “la primera decisión debe ser definir qué actividades se puedan realizar en qué partes del territorio, para lo cual debe ponerse en práctica la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y el Ordenamiento Territorial, pero además los gobiernos locales y regionales deben ser los encargados de la ZEE y la OT y el Ministerio del Ambiente debe ser el órgano rector. La ZEE y el OT deben ser procesos participativos, apoyados en aspectos técnicos (PERÚ, 2019).

La garantía de los derechos fundamentales debe verse reflejada en normas materiales. “El Ordenamiento Territorial como herramienta de gestión del riesgo tiene como objetivo principal establecer los criterios para la toma de decisiones concertadas sobre el uso sostenible del territorio, la Resolución Ministerial N° 26-2010-MINAM, que establece los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial” (MUQUI, 2018).

El caso más preocupante es el proyecto minero Río Blanco que tiene 17 concesiones con un total de 13,644 hectáreas en zona de frontera y en ecosistemas de páramos y bosques de neblina y que mediante Decreto Supremo N° 024-2008-DE se declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras.

- **Estudio de Impacto Ambiental:**

Los EIA son preparados por empresas consultoras especializadas que trabajan para las empresas mineras y cuyo objetivo no es cautelar el medio ambiente y los derechos de la población sino lograr que las autoridades competentes aprueben el estudio. Las audiencias públicas de los EIA son meramente informativas y se realizan al final de todo el proceso. Finalmente, el ente encargado de la aprobación de los EIA de los grandes proyectos mineros (el SENACE) es un organismo centralizado en el que no hay participación de los gobiernos regionales ni locales ni en su órgano directivo ni en sus equipos técnicos (PERÚ, 2019).

El Sistema de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema concertado sobre el proceso de estudio de impacto ambiental y la habilitación para el inicio de proyectos de inversión minera que asigna responsabilidades desde los gobiernos locales. Así, uno de los principios del SEIA es el de Complementariedad: “El Estado debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el SEIA, así como en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y otras obligaciones a nivel nacional, regional y local” (MUQUI, 2018).

- **Contenido normativo y obligaciones del derecho fundamental al agua:**

La Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Ley 30588. Art. 7-A establece que “el Estado reconoce el derecho de toda persona de acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible del 21 de junio del 2017”. Con esta norma, el Perú y su ordenamiento jurídico nacional inicia un tratamiento serio del derecho fundamental al agua, toda vez que esta norma surge de una necesidad de la población y las instituciones que debe irse implementando y tomando esa dimensión que merece.

En la sentencia 06534/2006/PA/TC del Tribunal Constitucional establece que el Estado se encuentra obligado a realizar ciertas acciones positivas para de esta manera garantizar el derecho. Primero menciona al acceso, entendido como la manera mediante la cual el Estado acerca a la población al recurso; como segundo punto menciona la calidad, entendida como la obligación de garantizar la salubridad el recurso y además de mantener en óptimas condiciones los servicios mediante los cuales se transporta el líquido elemento; finalmente menciona a la suficiencia, entendida como la racionalización del recurso a las personas en cantidades adecuadas y que al menos suplan los usos personales y domésticos (ARBULÚ, 2014).

En la Sentencia T-573-13 de Colombia, establece: “Así esta Corte ha señalado que el Estado tiene la obligación de realizar acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho por medio de medidas legales y administrativas, presupuestarias y judiciales que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute el derecho al agua potable e impone al Estado que adopte medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho al agua, tomen medidas para que se difunda información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los

desperdicios de agua y garantice el acceso a una cantidad suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico de agua, en los casos en que los particulares o los grupos no estén en condiciones por razones ajenas a su voluntad de ejercer por sí mismo ese derecho con ayuda de los medios a su disposición (Colombia, 2013).

En el caso del contenido normativo del derecho fundamental al agua el Estado no cumple con esos indicadores debido a que carece de instrumentos efectivos para garantizar la suficiencia, la calidad y pone en riesgo inminente a partir de otras figuras como la concesión minera o el estudio de impacto ambiental que no son realizados bajo un diagnóstico real de la fragilidad de ecosistemas.

Por lo que pruebo la hipótesis, demostrando que el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca se ve amenazada debido a las concesiones mineras que se tienen en este territorio.

4.1.2. PROBANZA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

La debilidad que presenta el Estado Constitucional peruano es que prioriza la actividad extractiva minero-metálica subordinando las normas jurídicas que protegen los recursos hídricos en la provincia de Ayabaca.

El Estado Constitucional, a partir de sus elementos constitutivos, debe garantizar la efectividad de las normas ambientales. En ese sentido debemos analizar brevemente dos instrumentos jurídicos relacionados con la garantía del Derecho Fundamental al agua como son la Consulta Previa y el Convenio 169 de la OIT:

- **Consulta Previa:**

En abril del año 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, se promulgó la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo en el Perú, Ley N° 29785, ante los problemas de conflictividad medioambientales, de despojo de tierras e irrespeto a derechos humanos de pueblos de diversas partes del país así como de tensión permanente por la preservación de recursos fundamentales para la población.

La Ley de Consulta Previa es un instrumento de aplicación obligatorio en países como el Perú en donde habitan pluralidad de culturas y pueblos, quienes merecen especial amparo de sus derechos. Ha sido una necesidad de la población de manera ascendente en los últimos años porque también ha aumentado los niveles de explotación de recursos en los distintos territorios del país.

Según el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora de Derechos Humanos “La consulta debe estar integrada a los procesos de planificación estatal previos a la toma de decisiones, especialmente cuando involucran el aprovechamiento de recursos naturales”, puesto que en la mayor parte de casos se dan concesiones en zonas frágiles y con ecosistemas muy importantes que afectan la vida de la población (HUMANOS., 2012).

A pesar de los avances jurídicos para defender los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. “En su Artículo 7 limita la denominación de “indígena” solo a los descendientes directos” y a quienes conserven “todos” sus elementos culturales, lo cual excluye a las rondas campesinas y los pueblos costeros. Debería considerarse indígenas a todos los descendientes desde antes de la colonia”.

La Ley de Consulta Previa, en base a criterios objetivos y subjetivos, establecidos en la norma, ha excluido a muchos pueblos. Se ha elaborado una base de datos desde el Ministerio de Cultura y en base a los criterios que la norma contempla, excluye a muchísimos pueblos. Esto contraviene artículos del Convenio 169 de la OIT.

Si bien es cierto el derecho a la consulta no tiene poder de veto por parte de las comunidades, es importante mencionar que el Estado debe ser consciente, bajo un enfoque ecológico, que no se debe explotar recursos sin tomar en cuenta que se pueden generar daños irreversibles y afectar recursos tan

importantes como el agua. En el caso de Ayabaca, las comunidades campesinas que existen en estos territorios, han sabido mantener las fuentes de agua que alimentan a buena parte de subcuencas y cuencas de la región Piura.

- **Convenio 169 de la OIT:**

Es importante mencionar que el Convenio 169 de la OIT, convenio internacional, forma parte del ordenamiento jurídico nacional y forma parte del llamado “bloque de constitucionalidad” por ser un tratado internacional de derechos humanos.

Las concesiones mineras a nivel nacional aumentaron de tal manera que los pueblos quedaron desprotegidos ante el Estado que no organiza territorialmente sus actividades. Los pueblos de distintas partes del país, en este caso Ayabaca, han recurrido al Convenio 169 de la OIT con el fin de proteger recursos fundamentales como ecosistemas frágiles y agua.

La invocación de instrumentos legales por parte de las poblaciones vulnerables, no es por la simple idea que un pueblo pretende vetar las decisiones gubernamentales sino ante la amenaza de contaminación o vulneración de estilos de vida y cuidado del medio ambiente, se hace de vital importancia su evaluación. Tal como nos menciona el Artículo 16 del Convenio 169 de la OIT:

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras (OIT O. , 2005).

- **El derecho a la consulta y a la participación ciudadana oportuna e informada:**

“Desde Tambogrande, pasando por Río Blanco en la provincia de Ayabaca, Tía María, etc. Las iniciativas pueden ser variadas: desde consultas ciudadanas municipales, pasando por consultas que pueden tener como referencia central las prácticas consuetudinarias de los pueblos.

Todas estas experiencias mostraron claramente cómo se venían afectando los derechos de poblaciones enteras y en los territorios se ha comprobado una clara situación de crisis de convivencia entre la minería y pueblos indígenas y comunidades rurales. Está abierto el carácter vinculante de las consultas”. (PERÚ, 2019).

El Estado Constitucional de Derecho peruano ha venido otorgando Decretos Supremos de necesidad pública en la provincia de Ayabaca para la exploración y explotación de minería metálica. Así mismo la Ley de Consulta Previa no ha incluido a pueblos originarios por lo que la población de la provincia de Ayabaca queda excluida de una consulta para elegir su modelo de desarrollo. Esta carencia es preocupante toda vez que atenta contra el Convenio 169 de la OIT y por tanto el llamado bloque de constitucionalidad de la que forma parte, sin embargo la población de la provincia de Ayabaca implementó una Consulta Vecinal (ciudadana) en la que más del 95% de la población dijo que no quería minería.

- **Recursos hídricos, reservas de agua en Ayabaca y cabeceras de cuenca:**

La disponibilidad de agua respecto a su origen en la región Piura provienen de los ríos Chira, Piura y Huancabamba. La primera constituye la cuenca fronteriza Catamayo-Chira, la misma que incluye el Río Quiroz que irriga el Valle San Lorenzo (CABREJOS, 2011).

Dos servicios ambientales fundamentales que el páramo presta a la población, directa e indirectamente relacionados con ellos y a la sociedad en general son la continua provisión de agua en cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global (VALLADOLID, 2010).

En las nacientes de dos grandes cuencas de los Andes del norte peruano en el departamento de Piura donde se originan los ríos Quiroz (hacia el Pacífico) y Chinchipe (hacia el Atlántico) se ubica un ecosistema de páramos y bosques de neblina que además de constituir una zona de alta complejidad biológica y concentración de endemismos como consecuencia de un accidente geológico denominado Deflexión de Huancabamba (TORRES, 2005).

Solamente la operación de Río Blanco, según Monterrico Metals (2005), pretende extraer 20 millones de toneladas de mineral por año, para producir 200,000 toneladas de cobre concentrado por año, en los primeros 5 a 10 años, utilizando la tecnología de concentración por flotación. De acuerdo a los estándares de Chile (Lagos y Andía. 2000), en el proceso de concentración la demanda mínima de agua es de 30 m³ por tonelada de cobre y la máxima de 162 m³ por tonelada de cobre; es decir, anualmente consumirían aproximadamente entre 6 a 32 millones de m³ de agua que incluso se incrementaría a partir del décimo año. Si se hace el cálculo desde el criterio de consumo de agua por tonelada seca de mineral a tratar que ingresa a las plantas concentradoras, el volumen de agua varía entre 0,36 y 1 m³/ton. Seca (Vega, 1999), es decir, anualmente el gasto sería de 7,2 a 20 millones de metros cúbicos. (TORRES, 2005)

Considerando que el río Quiroz aporta agua a los reservorios de Poechos y San Lorenzo, la pretensión de explotar minerales en sus nacientes pone en serio riesgo de desertificación a esta cuenca de Piura y afectaría a las ventajas comparativas y posibilidades de competencia de su agricultura liderada por cultivos de exportación como el mango, banano, limón, azúcar, café y otros cuyo futuro inmediato dependerá de la inocuidad y carácter ecológico de su producción. (TORRES, 2005).

- **El Estado Constitucional peruano y el Acuerdo de París:**

El acuerdo de París obtenido en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2015 fue firmado por el Perú y ratificado el 22 de julio del 2016, mediante su Decreto Supremo N° 058-2016-RE. El propósito fundamental del acuerdo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales (RAEZ, 2019).

- **El Estado Constitucional y su debilidad en la protección de recursos hídricos y agua:**

El 15 de agosto del 2017 se promulgó la Ley que modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 30640, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca.

Sobre ese tema Marco Arana, ex congresista de la República refiere: “La creación del “Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”, el cual debía ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo de 365 días, lo que se venció el pasado 16 de agosto del 2018, por lo que el Ejecutivo viene incumpliendo la Ley N° 30640 e incurriendo en una grave responsabilidad ambiental y, en la falta de voluntad política para prevenir la alta conflictividad existente alrededor de la disponibilidad y acceso de los recursos hídricos” (ARANA, 2019).

Agrega además que “Cabe indicar que el Marco Metodológico permitirá la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, lo cual determinará las zonas de restricción para derechos de uso de agua, en tanto son zonas vulnerables. Dicho Marco Metodológico, deberá contemplar la validación de los componentes ambientales que se ubican en las zonas identificadas, a fin de medir la fragilidad de las mismas. Sin ello, el Ejecutivo, estaría no reconociendo la importancia de la norma propuesta y afectando directamente las comunidades y localidades que se benefician de las cabeceras de cuenca, y de otro lado, favoreciendo intereses económicos que están o pretenden intensificar sus actividades económicas precisamente en estas zonas vulnerables” (ARANA, 2019).

4.1.3. PROPUESTA

Los derechos fundamentales son la expresión más inmediata de la dignidad humana por lo que a partir de la regulación del derecho fundamental al agua en nuestra Constitución Política del Perú ha consistido en un gran avance en la discusión jurídica nacional, no sin mencionar que han existido instrumento del derecho internacional que lo ampara y que el Tribunal Constitucional también ha sustentado en sentencias al respecto.

Sin embargo en la actualidad, por la coyuntura mundial del calentamiento global y el desorden en actividades económicas es importante pensarlo y para que se haga efectivo este derecho fundamental debe haber una exigencia mayor al Estado Constitucional de Derecho peruano puesto que los derechos son la *conditio sine qua non* del Estado constitucional democrático de derecho. En el caso de la presente investigación, la vulneración al derecho fundamental al agua pasa porque las normas legales de la minería metálica referidas a las concesiones mineras y los estudios de impacto ambiental colocan en peligro esos recursos tan fundamentales como el aire que se respira. Asimismo se debe impulsar con mayor exigencia a todo el marco institucional jurídico para la protección de fuentes de agua en la provincia de Ayabaca y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Asimismo los derechos fundamentales, cristalizan como directrices constitucionales y reglas de actuación legislativa de las que se desprende la obligación, no accionable, pero sí jurídicamente vinculante, de una determinada puesta en marcha de la actividad estatal. Para que no se quede en la enunciación del derecho sino que se concrete, regulando también las figuras jurídicas como la concesión minera, modificando la Ley General de Minería. En la práctica esta figura se equipara con el de propiedad, conteniendo todos sus atributos, distorsionando por tanto el derecho mismo y tergiversando el derecho como tal y se hace necesario que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse a esta situación pero también a zonas de fragilidad ecológica y su protección necesaria.

Finalmente la obligación positiva del Estado Constitucional de derecho es contribuir a la efectividad de los derechos fundamentales, que sobre todos los poderes públicos recae, debe hacerse bajo principios éticos positivos que nuestro ordenamiento jurídico posee las distintas actividades de la economía para garantizar compromisos contra el calentamiento global y sobre todo para la garantía del derecho fundamental al agua para la provincia de Ayabaca pero también para áreas que forman parte de ese sistema hídrico.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El derecho fundamental de acceso al agua potable, incorporado recientemente en nuestra Constitución Política de 1993 tiene alcances en su definición a todo el sistema de producción y abastecimiento, desde su origen mismo hasta el abastecimiento y consumo en las diferentes actividades de la sociedad de la provincia de Ayabaca.

SEGUNDA.- El Estado Constitucional de derecho, en el marco de los compromisos ambientales y sociales internacionales debe planificar de manera ordenada y zonificada las actividades extractivas para garantizar el abastecimiento de agua de calidad en la provincia de Ayabaca.

TERCERA.- Existe un problema complejo entre la preservación de ecosistemas y la minería en la provincia de Ayabaca, toda vez que las concesiones mineras y el estudio de impacto presentan serias complicaciones como instituciones jurídicas que las regulan y se encuentran cuestionadas.

CUARTA.- El Estado Constitucional de Derecho, en base a sus principios, posee obligaciones que deben ser coherentes con los derechos fundamentales, ya que su razón de ser es la persona y su dignidad, no sólo formales sino materiales.

QUINTA.- La operación de Río Blanco, según Monterrico Metals (2005), pretende extraer 20 millones de toneladas de mineral por año, para producir 200,000 toneladas de cobre concentrado por año, en los primeros 5 a 10 años, con lo que estas concesiones mineras expresa la vulneración al derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca y que posee cuestionamientos a los estudios de impacto ambiental.

SEXTA.- El Estado Constitucional, a partir de sus elementos constitutivos, debe garantizar la efectividad de las normas ambientales. El Convenio 169 de la OIT no es cumplido por el Estado peruano a pesar de formar parte del llamado bloque de constitucionalidad así como la Ley de Consulta Previa que no ha sido implementada tomando en cuenta la importancia para la preservación de derechos fundamentales como el agua.

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se recomienda al Estado peruano el fortalecimiento del ordenamiento territorial (OT) para garantizar el derecho fundamental al agua, en este caso en la provincia de Ayabaca, tomando en cuenta los estudios científicos ecológicos.

SEGUNDA.- Se requiere la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) por parte del Estado Constitucional de Derecho que pueda establecer criterios técnicos y ambientales para las distintas actividades económicas.

TERCERA.- Teniendo en cuenta que el derecho fundamental al agua está contemplado en nuestra Constitución debe realizarse estudios mayores en materia jurídica que contribuyan sobre todo en la vía judicial, su implementación y fortalecimiento y en estudio de las concesiones mineras toda vez que esta figura es semejante al de la propiedad

CUARTA.- La vulneración a un derecho fundamental no sólo consiste en la afectación presente sino a la incapacidad de garantizarlo, es por ello que la tutela jurisdiccional debe tener mecanismos efectivos de protección de los derechos como la protección a las fuentes de agua de la provincia de Ayabaca.

QUINTA.- Hacer una revisión de la figura de la concesión minera en nuestro ordenamiento jurídico nacional y establecer la constitucionalidad de esta figura que pone en riesgo derechos tan fundamentales como el derecho al agua.

SEXTA.- El Estudio de Impacto ambiental, en la mayor parte de los casos los hacen consultoras contratados por los concesionarios y no establecen criterios neutrales y objetivos por lo que se debe modificar y tener presencia de instituciones más propicias para proporcionar un resultado más técnico y científico de las implicancias de actividades extractivas como la minería a tajo abierto.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (seudónimo), A. (s.f.). *XVIII Concurso Universitario FERIA de Ciencias UNAM*. Obtenido de <http://feriadeciencias.unam.mx>
- ALFARO, M. J., & CÁRDENAS, A. A. (1998). *Manejo de cuencias: Hacia una Nueva Estrategia del Desarrollo Rural en el Perú*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- ALFARO, M. J., & CÁRDENAS, A. A. (1998). *Manejo de cuencias: Hacia una Nueva Estrategia del Desarrollo Rural en el Perú*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- ANA, A. (2018). *Autoridad Nacional del Agua*. (M. d. Riego, Editor) Obtenido de <http://www.ana.gob.pe>
- ANGULO, L. (2006). *Cambio climático, patrones de riesgos de desastres y escenarios futuros. Retos para el desarrollo regional y local en la cuenca del Río Piura*. (R. L. Sociedad, Editor) Obtenido de Recuperado de <http://www.solucionespracticas.org.pe/tys>
- ARANA, Z. M. (2019). *EXIGIMOS APROBACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO DE LA LEY 30640*. Obtenido de vozdelatierra.lamula.pe
- ARBULÚ, V. A. (2014). *El derecho al agua bajo análisis: distintos enfoques sobre un tema que nos compete a todos*. (R. V. Porres, Editor) Obtenido de <http://www.usmp.edu.pe/>
- BACA, T. E. (2013). *Estudio sobre marco normativo minero en Perú*. (G. P. Ciudadana, Editor) Obtenido de <http://propuestaciudadana.org.pe/>
- BARBOZA, L. Ó. (2013). *Calentamiento Global: La máxima expresión de la civilización petrofósil*. (R. d. CESLA, Editor) Obtenido de <http://www.researchgate.net>
- BEBBINGTON, A., & BURY, J. (2010). *Minería, instituciones y sostenibilidad: desencuentros y desafíos*. (R. Antropológica, Editor) Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/>
- BELAÚNDE, M. M. (2011). *Derecho minero y concesión*. Lima: San Marcos E.I.R.L.
- BERNAL, C. (2015). *La protección del derecho fundamental al agua en perspectiva internacional y comparada* (Vol. 1). (R. d. Palermo, Ed.) Buenos Aires, Argentina . Obtenido de www.palermo.edu
- CABREJOS, V. C. (2011). *ACTUALIZACIÓN DEL MAPA REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO DE PIURA*. PIURA: CIPCA.
- CANNOCK, F. G. (2016). *Nueva Ley de Aguas. Comentarios a la Nueva Ley y Reglamento de Recursos*. Lima: Berrio.
- CARPIZO, J. (jul./dic. de 2011). *Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características*. (S. C. Const., Productor) Obtenido de <http://www.scielo.org.mx>
- CLIMÁTICO, C. M. (1992). (N. Unidas, Editor) Obtenido de <https://unfccc.int>
- Colombia, C. C. (2013). *Sentencia T-573/13*. Recuperado el 2019, de <http://corteconstitucional.gov.co>

- CONACAMI. (2006). *¿Por qué y para qué tanta lucha?* (R. d. minera, Editor)
- CONDE, Á. C., & SALDAÑA, Z. S. (2007). *Cambio climático en América Latina y el Caribe: Impactos, vulnerabilidad y adaptación.*, 23. (R. A. Desarrollo, Editor) Obtenido de <http://www.keneamazon.net/>
- D. Leg N° 109. (1992). *Ley General de Minería*. Lima: Diario Oficial El Peruano.
- GARAY, R. C. (S.F.). *Derecho a la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los páramos de Pacaipampa, Ayabaca, frente a la minería*. (U. N. Piura, Ed.) PIURA : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA .
- GARCÍA, M. T. (2007). *Voces y reflexiones ayavaquinas*. Lima: Raíces, centro de investigación y promoción cultural.
- GARCÍA, T. V. (2014). *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*. Lima: Adrus.
- HUMANOS., G. D. (2012). *Análisis crítico de la Consulta Previa en el Perú: Informes sobre el proceso de reglamentación de la ley de consulta y del reglamento*. (C. G. EDITORES, Editor) Obtenido de <http://dar.org.pe>
- Ley N° 28245. (2004). *Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental*. Lima: Diario Oficial El Peruano.
- Ley N° 28611. (2005). *Ley General del Ambiente*. Lima: Diario Oficial El Peruano.
- Ley N° 29338, L. d. (2016). *Nueva Ley y Reglamento de Recursos Hídricos*. Lima, Perú: Berrio.
- LEY N° 30588. (2009). *Ley de Recursos Hídricos*. Lima: Diario Oficial El Peruano.
- Ley N° 30754. (2018). *Ley Marco contra el cambio climático*. Lima: Diario Oficial el Peruano.
- LEY, L. (05 de ENERO de 2017). *TC: CONCESIÓN MINERA NO OTORGA A SU TITULAR EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL TERRENO*. Obtenido de <http://laley.pe>
- MARTÍNEZ, A., & DEFELIPPE, O. (2013). *El derecho humano al agua y el control de convencionalidad*. (R. d. PUCP, Editor) Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/>
- MINAM, M. D. (2009). *Cambio climático y desarrollo sostenible en el Perú*. Obtenido de Recuperado de <http://www.minam.gob.pe>
- MINAM, M. D. (2013). *Glosario de términos. Sitios Contaminados*. Obtenido de <http://www.minam.gob.pe/>
- MUQUI, R. (2018). *AGENDA RED MUQUI*. LIMA: SINCO Diseño EIRL.
- O'DIANA, R. R. (2019). *CONTRIBUIR PARA TENER TIEMPO. ANÁLISIS LEGAL Y ESTADO DE AVANCE DE LAS NDC EN EL PERÚ*. LIMA: MOCICC.
- OIT, O. (2005). *CONVENIO 169*. LIMA: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
- OIT, O. I. (2014). *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas*. Obtenido de <https://www.ilo.org>

- PAZ, C. M., & GARCÍA, J. (2006). *Cambio climático en el Perú: variable a considerar para el desarrollo*. (R. L. Sociedad, Editor) Obtenido de Recuperado de <http://www.solucionespracticas.org.pe>
- PERÚ, E. N. (2019). *NUEVA MINERÍA PARA UN NUEVO PERÚ*. LIMA: NUEVO PERÚ.
- PLAZA, C. (2008). *Derecho humano al agua*. (A. p. Agua, Editor) Obtenido de <http://alianzaporelagua.org/>
- RAEZ, L. E. (2019). *CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ*. LIMA: MOCICC.
- RAFAEL, Y. S. (2018). *El reconocimiento constitucional del agua como derecho fundamental*. (F. d. Bautista, Editor) Obtenido de Recuperado de <http://repositorio.upsjb.edu.pe>
- RUIZ, M. J. (2009). *Estado Constitucional de Derecho, democracia y descentralización*. Obtenido de www2.congreso.gob.pe
- SAGUMA, A. V. (2002). Aporte al desarrollo local con enfoque de gestión de cuencas. *Revista de Cultura EPOKHA ANDINA*, 18-20.
- SALMÓN, E. (2012). *El derecho humano al agua y los aportes del sistema interamericano de derechos humanos*. (D. y. Universitas: Revista de Filosofía, Editor) Obtenido de <http://universitas.idhbc.es/>
- SOCIEDAD, D. Y. (2017). *JUZGADO DE TAMBOPATA DECLARA NULA CONCESIONES MINERAS*. Obtenido de <http://www.derechoysociedad.org>
- TORRES, F. (2005). *Desertificación por minería metálica en páramos y bosques de neblina de nacientes de cuenta en norte de Perú*, 9. (R. Z. Áridas, Editor) Obtenido de <http://revistas.lamolina.edu.pe/>
- URTEAGA, C. P. (2006). *El derecho colectivo al agua*. Obtenido de <http://www.researchgate.net/>
- VALLADOLID, C. B. (2010). *ESPECIES FORESTALES DE PIURA*. PIURA: CEPECER.
- VARGAS, P. (julio de 2009). *El cambio climático y sus efectos en el Perú*. (B. C. Perú, Editor) Obtenido de <http://sinia.minan.gob.pe>
- VINCES, A. M., & MALCA, A. R. (2015). *La concesión minera en el ordenamiento peruano: Análisis sobre su naturaleza jurídica*. (R. d. USAT, Editor, & U. C. Mogrovejo, Productor) Obtenido de <http://www.usat.edu.pe>

ANEXOS

ANEXOS 1: MATRIZ BÁSICA

Matriz Básica De Consistencia

	PREGUNTAS	HIPÓTESIS	OBJETIVO
General	¿De qué manera las normas jurídicas de la actividad minera metálica vulnera el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca.	Las normas que regulan el funcionamiento de la actividad minera metálica relativas a las concesiones mineras y el estudio de pacto ambiental vulneran el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca en cuanto a su contenido normativo y obligaciones, ya que no son adecuadas permitiendo que el desarrollo de la actividad minera ocasione un perjuicio a este elemento.	Determinar de qué manera la actividad minera metálica vulnera el derecho fundamental al agua en la provincia de Ayabaca.
Específica 1	¿Qué debilidad presenta el Estado Constitucional de Derecho respecto de la protección del agua en la provincia de Ayabaca?	La debilidad que presenta el Estado Constitucional peruano es que prioriza la actividad extractiva minero-metálica subordinando las normas jurídicas que protegen los recursos hídricos en la provincia de Ayabaca.	Analizar el accionar del Estado Constitucional peruano respecto de la protección del agua.

ANEXOS 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHAJE

FICHA BIBLIOGRÁFICA

CARRASCO DÍAZ, Sergio

“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”

Lima, Editorial San Marcos

2da Edición: 2008

Decimotercera reimpresión: abril de 2017

476 páginas

FICHA BIBLIOGRÁFICA

QUEVEDO URBINA, Tulio

“RECUERDO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE AYABACA”

Piura, Editorial RAISAC

1ra Edición: 2018

370 páginas

FICHA BIBLIOGRÁFICA

GARAY RAYMUNDO, César (s.f)

“DERECHO A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS PÁRAMOS DE PACAIPAMPA- AYABACA FRENTE A LA MINERÍA”

Tesis para optar el título de abogado

Universidad Nacional De Piura

Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas

FICHA BIBLIOGRÁFICA

RUIZ, M. JUAN CARLOS. (2011).

Guía de interpretación de la Ley de Consulta Previa de los pueblos indígenas (Ley N° 29785).

Lima

Bellido Ediciones. Instituto de Defensa Legal.

Recuperado de <https://www.idl.org.pe/>

pp. 291

FICHA BIBLIOGRÁFICA

ALFARO M. J. & CÁRDENAS A. A.

Manejo de cuencas: Hacia una Nueva Estrategia del Desarrollo Rural en el Perú.

Fundación Friedrich Ebert.

1998.

pp. 212

FICHA DE CITA TEXTUAL

“Dado que el cambio climático disminuye la cantidad de agua disponible (por afectar los regímenes de precipitación y derretimiento de los glaciares), esta asimetría, a su vez, se acentúa al estimar el uso de los recursos naturales y, sobre todo del abastecimiento y disponibilidad del agua. Se calcula que cerca del 90% de la población se ubica en el 38% del territorio nacional, el cual dispone de menos del 2% del agua aprovechable en el país” (Paz & García, 2006, p. 59).

FICHA DE CITA TEXTUAL

La reforma constitucional que incorpora el Art. 7-A, dice:

El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible (Ley N° 30588, 2018).

FICHA DE CITA TEXTUAL

“Una de las principales apuestas de las políticas del Consenso de Washington implementadas con fuerza en el Perú, desde inicios de los años 90, fue promover las inversiones en el sector minero. Para ello, se diseñó un marco normativo muy atractivo para las inversiones, con facilidades y beneficios tributarios a los que se sumaban los contratos de estabilidad tributaria y administrativa”

EPIFANIO BACA TUYAPACHI “ESTUDIO SOBRE MARCO NORMATIVO MINERO EN PERÚ”

FICHA DE CITA TEXTUAL

“En las nacientes de dos grandes cuencas de los Andes del norte peruano en el departamento de Piura donde se originan los ríos Quiroz (hacia el Pacífico) y Chinchipe (hacia el Atlántico) se ubica un ecosistema de páramos y bosques de neblina que además de constituir una zona de alta complejidad biológica y concentración de endemismos como consecuencia de un accidente geológico denominado Deflexión de Huancabamba” (Torres, 2005).

ANEXOS 3: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
AÑO	2019							
ACTIVIDADES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ETAPA DE ANÁLISIS – METODOLÓGICA								
ANÁLISIS PREVIO	X	X						
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	X	X						
RECOPIACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DATOS	X	X						
CLASIFICACIÓN DE DATOS		X	X					
ANÁLISIS CRÍTICO E INTERPRETATIVO		X	X					
ETAPA ELABORATIVA								
ANÁLISIS METÓDICO			X	X	X	X	X	
REDACCIÓN			X					

INICIAL								
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO				X				
APROBACIÓN DEL PROYECTO				X				
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN			X	X	X			
SEGUNDA REDACCIÓN					X			
PREPARACIÓN BIBLIOGRÁFICA, CITAS, ANEXOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS						X		
CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE LA TESIS							X	
SUSTENTACIÓN								X

ANEXOS 4: PRESUPUESTO

Para la elaboración de la presente investigación, y su correspondiente ejecución se han proyectado los siguientes cuadros de recursos y presupuestos de gastos, los mismos que detallo a continuación.

- **Recursos:**

INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN		S/. 1990.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS	

- **Gastos de Presupuesto:**


RUBRO	CONCEPTO	COSTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	TASAS ADMINISTRATIVAS	S/. 140.00
BIENES	IMPRESORA EPSON	S/. 500.00
	CARTUCHOS Y TINTAS	S/. 250.00
	HOJAS A4 (SIMILARES)	S/. 100.00
	MATERIAL DIDÁCTICO	S/. 150.00
SERVICIOS	PASAJES Y VIATICOS	S/. 200.00
	SERVICIO DE COPIAS	S/. 100.00
	SERVICIO DE TIPEO	S/. 250.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	S/. 200.00
	INTERNET E IMPRESIONES	S/. 300.00
	TOTAL	S/ 1990.00

APÉNDICES

APÉNDICE 1: LEY N° 30588: LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

4

NORMAS LEGALES

Jueves 22 de junio de 2017 /  El Peruano

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Ordenanza N° 436/MDSMP.- Regulan el comercio ambulatorio en los espacios públicos autorizados en la jurisdicción del distrito **93**

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

R.A.N° 227-2017-MDS.- Conforman el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada - CEPRI **94**

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

Acuerdo N° 016-2017 CM/MPC-M.- Autorizan viaje del Alcalde a Italia, Francia y Bélgica, en comisión de servicios **95**

SEPARATA ESPECIAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

RR. N°s. 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 y 134-OS/CD.- Resuelven diversos Recursos de Reconsideración interpuestos contra las Resoluciones de Consejo Directivo N°s 061 y 062-2017-OS/CD mediante las cuales se fijaron peajes y compensaciones para los SSTy SCT para el periodo 2017 - 2021 y se aprobó el Cargo Unitario de Liquidación de los SST y SCT producto de la Liquidación Anual de los Ingresos, periodo mayo 2017 - abril 2018

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Circular N° 0020-2017-BCRP.- Disposiciones de Encaje en Moneda Extranjera

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY N° 30588

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la siguiente Ley de Reforma Constitucional:

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

Artículo único. Incorporación del artículo 7°-A de la Constitución Política del Perú
Incorpórase el artículo 7°-A de la Constitución Política del Perú, conforme al texto siguiente:

"Artículo 7°-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible".

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de junio de dos mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1536004-1

LEY N° 30589

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS

Artículo 1. Objeto de la Ley

Declárase de interés nacional y necesidad pública el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, constituida por la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso en la provincia de Grau, Apurímac.

Artículo 2. Coordinación de acciones

Encárgase al Poder Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac, y los sectores involucrados, la realización de las acciones necesarias para priorizar la elaboración de un plan de desarrollo económico, social y ambiental de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, de acuerdo a sus competencias y prioridades presupuestales y sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Artículo 3. Impacto

El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac, determinará la ejecución de proyectos prioritarios en relación al conjunto de las provincias del departamento de Apurímac, atendiendo la demanda social de la ciudadanía.

Artículo 4. Informe al Congreso

El Poder Ejecutivo informará semestralmente a la Comisión de Descentralización, Regionalización,



DEFENSA

Declaran de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras y se autoriza a empresa minera a adquirir derechos dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera

DECRETO SUPREMO
N° 024-2008-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 71° de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido y que se exceptúa el caso de necesidad pública, expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a Ley;

Que, Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co., Ltd., sociedad constituida y vigente bajo las leyes de la República Popular China, mediante escrito N° 1701879 ha solicitado autorización para adquirir de manera indirecta la titularidad de treinta y cinco (35) derechos mineros ubicados dentro de los 50 kms. de la frontera norte del país;

Que, la empresa precitada ha señalado que la adquisición de ocho (8) de los derechos mineros mencionados se concretará mediante la adquisición de acciones de Monterrico Metals Plc., una compañía constituida y vigente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, de tal forma que la empresa solicitante tendrá más del 50% de acciones con derecho a voto;

Que, Monterrico Metals Plc. es titular del 100% de las acciones representativas del capital social de Copper Corp. Limited, empresa constituida y vigente bajo las leyes de la Isla Gran Cayman, que es a su vez titular del 100% de las acciones representativas del capital social de Rio Blanco Copper Limited, empresa constituida y vigente bajo las leyes de George Town, Isla Gran Cayman, siendo esta última titular del 99.98% de las acciones representativas del capital social de Minera

Majaz S.A., sociedad constituida y vigente bajo las leyes de la República del Perú;

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2003-EM, de fecha 26 de junio de 2003, se declaró de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, y se autorizó a Río Blanco Copper Limited a adquirir el 100% de las acciones representativas del capital social de la empresa Minera Majaz S.A., titular de ocho (8) derechos mineros ubicados en la zona de frontera con el Ecuador, en los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca, provincias de Huancabamba y Piura, departamento de Piura, los cuales forman parte de los derechos mineros a que se refiere el segundo considerando;

Que, Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co., Ltd. señala que, además, adquirirá veintisiete (27) derechos mineros cuyo titular es Compañía Minera Mayari S.A.C., mediante la adquisición del 100% de las acciones representativas de su capital;

Que, el numeral V del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM, dispone que la industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en la actividad minera es de interés nacional;

Que, el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus normas reglamentarias, autoriza a que se declare de necesidad nacional la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades productivas realizadas o por realizarse en la zona de fronteras del país;

Que, la solicitud formulada por Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co. Ltd., se encuentra incluida dentro del supuesto de necesidad pública establecido en el artículo 71° de la Constitución Política del Perú, dado que el interés en establecer la titularidad del derecho minero solicitado trasciende al interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad, toda vez que mediante dicha excepción, se trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona

de incidencia de las actividades mineras, descritas en el presente Decreto Supremo;

Que, la solicitud de Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co. Ltd., para la adquisición de treinta y cinco (35) derechos mineros cuenta con la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitida mediante Oficio N° 3847-EMCFFAA-D4/PLN MOV de fecha 19 de diciembre de 2007, remitida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa mediante Oficio N° 1548-SGMD-A de fecha 26 de diciembre de 2007;

Que, es necesario dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 023-2003-EM, de fecha 26 de junio de 2003;

De conformidad con lo establecido por el inciso 3) del artículo 11° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158; y, en uso de las atribuciones previstas en los numerales 8) y 24) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.- Objeto

Declarar de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin que Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co. Ltd., pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera norte del país, en los lugares donde se ubican los derechos mineros que se detallan en el artículo 2° del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Autorización de adquirir derechos mineros

Autorizar a Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co. Ltd., a adquirir treinta y cinco (35) derechos mineros, ubicados en el departamento de Piura, en la zona de frontera norte del país, detallado a continuación:

N°	CÓDIGO	DERECHO MINERO	HÁS.	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
1	01-00291-01	Cirrosis I	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
2	01-00290-01	Cirrosis II	819.4735	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
3	01-00689-01	Cirrosis 3	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
4	01-00690-01	Cirrosis 4	1000	Ayabaca El Carmen de la Frontera	Ayabaca Huancabamba	Piura
5	01-00795-01	Cirrosis 5	498.7042	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
6	01-00796-01	Cirrosis 6	732.3023	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
7	01-00714-02	Cirrosis 7	422.67	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
8	01-01008-02	Cirrosis 8	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
9	01-02347-04	CDLF 1	600	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
10	01-02348-04	CDLF 2	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
11	01-02354-04	CDLF 3	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
12	01-02353-04	CDLF 4	913.0487	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
13	01-02352-04	CDLF 5	457.9538	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
14	01-02349-04	CDLF 6	174.355	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
15	01-02351-04	CDLF 7	11.3919	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
16	01-02350-04	CDLF 8	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
17	01-01579-05	CDLF 9	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
18	01-01210-02	Mojica 1	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
19	01-01213-02	Mojica 2	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
20	01-01214-02	Mojica 3	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
21	01-01215-02	Mojica 4	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura

Nº	CÓDIGO	DERECHO MINERO	HÁS.	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
22	01-01216-02	Mojica 5	800	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
23	01-01304-02	Mojica 6	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
24	01-01306-02	Mojica 8	1000	Ayabaca El Carmen de la Frontera	Ayabaca Huancabamba	Piura
25	01-01307-02	Mojica 9	1000	Ayabaca El Carmen de la Frontera	Ayabaca Huancabamba	Piura
26	01-01308-02	Mojica 10	1000	Ayabaca Paicapampa El Carmen de la Frontera	Ayabaca Ayabaca Huancabamba	Piura
27	01-01309-02	Mojica 11	800	Ayabaca	Ayabaca	Piura
28	01-01310-02	Mojica 12	800	Ayabaca	Ayabaca	Piura
29	01-01311-02	Mojica 13	800	Ayabaca	Ayabaca	Piura
30	01-01312-02	Mojica 14	800	Ayabaca El Carmen de la Frontera	Ayabaca Huancabamba	Piura
31	01-01313-02	Mojica 15	1000	Ayabaca	Ayabaca	Piura
32	01-01314-02	Mojica 16	837.9	Ayabaca El Carmen de la Frontera	Ayabaca Huancabamba	Piura
33	01-01808-02	Mojica 18	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
34	01-01808-02	Mojica 19	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura
35	01-01810-02	Mojica 20	1000	El Carmen de la Frontera	Huancabamba	Piura

Artículo 3°.- Autorizaciones para actividades mineras

La autoridad minera otorgará las autorizaciones para las actividades mineras en los derechos mineros a que se refiere el artículo segundo, en favor de Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development Co. Ltd., previo cumplimiento de las disposiciones y requisitos legales aplicables y con estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú.

Artículo 4°.- Sanción

La transferencia de la posesión o propiedad de los bienes a que se refiere el presente decreto supremo a otros inversionistas extranjeros que no cuenten con la correspondiente autorización dará lugar a la pérdida del derecho adquirido, en beneficio del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 71° de la Constitución Política del Perú.

Artículo 5°.- Efecto de decreto supremo

Déjese sin efecto el Decreto Supremo N° 023-2003-EM, de fecha 26 de junio de 2003.

Artículo 6°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de diciembre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO

Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA

Ministro de Energía y Minas

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE


Ministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho del

Ministerio de Defensa

295022-3

APÉNDICE 3: LEY QUE MODIFICA LA LEY 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA

<p> El Peruano / Miércoles 16 de agosto de 2017</p>	<p>NORMAS LEGALES</p>	<p>5</p>
<p>En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil diecisiete.</p> <p>LUZ SALGADO RUBIANES Presidenta del Congreso de la República</p> <p>ROSA BARTRA BARRIGA Primera Vicepresidenta del Congreso de la República</p> <p>AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA</p> <p>POR TANTO:</p> <p>Mando se publique y cumpla.</p> <p>Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.</p> <p>PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente de la República</p> <p>FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Presidente del Consejo de Ministros</p> <p>1554967-2</p>	<p>DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL</p> <p>ÚNICA. Adecuación de la norma reglamentaria La Autoridad Nacional del Agua adecuará la norma reglamentaria a lo dispuesto en la presente ley, dentro de los noventa (90) días contados desde su vigencia.</p> <p>DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA</p> <p>ÚNICA. Plazo para elaboración de Marco Metodológico La Autoridad Nacional del Agua, con participación de los sectores competentes, debe elaborar el Marco Metodológico al que hace referencia el artículo 75, dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días, contados desde la vigencia de la presente ley.</p> <p>Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.</p> <p>En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil diecisiete.</p> <p>LUZ SALGADO RUBIANES Presidenta del Congreso de la República</p> <p>ROSA BARTRA BARRIGA Primera Vicepresidenta del Congreso de la República</p> <p>AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA</p> <p>POR TANTO:</p> <p>Mando se publique y cumpla.</p> <p>Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.</p> <p>PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente de la República</p> <p>FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Presidente del Consejo de Ministros</p> <p>1554967-3</p>	
<p>LEY Nº 30640</p> <p>EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA</p> <p>POR CUANTO:</p> <p>LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;</p> <p>Ha dado la Ley siguiente:</p> <p>LEY QUE MODIFICA LA LEY 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CABECERAS DE CUENCA</p>		
<p>Artículo 1. Objeto de la Ley La presente ley tiene por objeto regular la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, incorporando en el artículo 75 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, a fin de evaluar la implementación de medidas especiales para su protección y conservación según su vulnerabilidad.</p> <p>Artículo 2. Modificación del artículo 75 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos Modifícase el artículo 75 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, en los siguientes términos:</p> <p>"Artículo 75. Protección del Agua (...) El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. Asimismo, debe elaborar un Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca".</p>	<p>PODER EJECUTIVO</p> <p>AGRICULTURA Y RIEGO</p> <p>Autorizan viaje de profesional del INIA a Costa Rica, en comisión de servicios</p> <p>RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0326-2017-MINAGRI</p> <p>Lima, 14 de agosto de 2017</p> <p>VISTOS:</p> <p>La Carta Nº KoLFACI 17-16, de fecha 13 de abril de 2017, de la Subsecretaría General de la Secretaría de la Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación (KoLFACI); así como el correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2017, de la Secretaría del KoLFACI; y,</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que, mediante la Carta Nº KoLFACI 17-16 de fecha 13 de abril de 2017, la Subsecretaría General de la Secretaría de la Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación (KoLFACI), solicita que seleccione a un participante para asistir al Curso Moderno</p>	